



# desco18

DERECHOS SOCIALES EN LA CORTE 2018

güdes

GRUPO DE INVESTIGACIÓN  
EN DERECHOS SOCIALES

# **desco18**

## **Derechos Sociales en la Corte 2018**

Una publicación de GIDES

Horacio Javier Etchichury y Magdalena Inés Álvarez  
(directorxs)

# desco18

Autoras y autores

Magdalena Inés Álvarez – María Julieta Cena – Nicolás Cocca –  
Horacio Javier Etchichury – Cecilia Andrea Ferniot

Una publicación de



Córdoba, 2019

Este trabajo es parte del desarrollo del proyecto de investigación proyecto Consolidar tipo 3 Secyt-UNC titulado *Políticas sociales y derechos sociales: hacia un modelo de análisis constitucional* (resolución Secyt-UNC 411/2018), dirigido por Horacio Javier Etchichury y co-dirigido por Magdalena Inés Álvarez. El proyecto, previsto para el período 2018-2021, cuenta con subsidio de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba (SECYT UNC). La presente publicación es posible gracias a dicho subsidio.



Esta obra se halla publicada bajo una licencia  
*Creative Commons* Reconocimiento – CompartirIgual (CC BY SA) 4.0 Internacional

Usted es libre para:

Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato.

Adaptar — remezclar, transformar y crear a partir del material para cualquier finalidad, incluso comercial.

Esta licencia no puede ser revocada mientras Usted cumpla con los términos de la licencia.

Bajo las condiciones siguientes:

Reconocimiento — Debe reconocer adecuadamente la autoría e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera que sugiera que tiene el apoyo o aprobación de los/las autores/as de esta obra.

CompartirIgual — Si remezcla, transforma o crea a partir del material, deberá difundir sus contribuciones bajo la misma licencia que el original.

No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos legales o medidas tecnológicas que jurídicamente restrinjan hacer aquello que la licencia permite.

**Diseño de tapa y contratapa: Beatriz Barbosa**

**ISBN 978-987-86-3079-3**

## Presentación

Nuevamente, tal como hicimos en 2016 y 2017, ofrecemos aquí un listado de 35 sentencias de la CSJN con alguna relevancia para los derechos sociales dictadas en 2018. Podrán encontrarse los datos formales (fecha, autos, cita en *Fallos* si la tiene), además de una síntesis lo más concisa posible de la cuestión en juego, la respuesta del tribunal y los argumentos centrales, junto a observaciones complementarias en algunos casos.

Nuestro objetivo es simple: aportar a la discusión sobre los derechos sociales en nuestro país, mediante la difusión de información que pueda ser útil a la población general y a quienes investigan la materia, litigan en torno a estos derechos o resuelven casos.

Reunimos los 35 fallos por tema y no por fecha. Nuestro propósito es mantener un lenguaje que no oculte las diferencias de género. Cuando ello no ha sido posible, el uso del masculino genérico debe entenderse que abarca a todos los géneros aplicables.

El presente texto es resultado del trabajo del Grupo de Investigación en Derechos Sociales (GIDES), radicado en el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales (CIJS) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). En cumplimiento de la ley 26.899, publicamos esta obra bajo una licencia libre y está disponible gratuitamente en el sitio de nuestro Grupo ([GidesCordoba.blogspot.com](http://GidesCordoba.blogspot.com)).

Durante 2018, como parte de un proyecto Consolidar tipo 3 Secyt-UNC (con subsidio), titulado “Políticas sociales y derechos sociales: hacia un modelo de análisis constitucional” (resolución Secyt-UNC 411/2018), a ejecutar durante el período 2018-2021, continuamos el seguimiento de las sentencias de la Corte y las debatimos en reuniones mensuales. Cada integrante del grupo elaboró una o más síntesis de fallos, que luego formaron la base de este libro. En 2019 volvimos a analizar algunos de estos fallos en un seminario abierto en el marco del CIJS y también en nuestra primera materia opcional en la carrera de Abogacía (“Los derechos sociales ante la Corte argentina”), dictada durante el segundo semestre. Esta publicación fue posible gracias al financiamiento de la Secyt UNC.

En este texto, consideramos “derechos sociales” todos aquellos contenidos en el art. 14 *bis* de la CN y en el PDESC. No incluimos –por no ser parte de nuestro proyecto de investigación– la materia ambiental y los derechos de usuarios y consumidores, salvo en aquellos casos que muestren un vínculo relevante con derechos sociales tal como los definimos.

Hemos revisado los acuerdos de la Corte desde febrero a diciembre de 2018. Del conjunto de sentencias dictadas, excluimos las que simplemente declaran inadmisibile el recurso sin dar fundamentos; nos interesa lo que el tribunal efectivamente dice sobre los derechos. Seguramente, ese rechazo también puede configurar una “jurisprudencia tácita”; pero interpretarla haría necesario el estudio completo de cada expediente, lo que –lamentablemente– excede nuestras posibilidades como grupo.

Asimismo, dejamos fuera de nuestro análisis las sentencias que el tribunal identifica como referidas a materia civil, penal, comercial, de familia y sucesiones, accidentes de tránsito y honorarios. En la revisión individual de los demás fallos, nos centramos en las que resuelven aspectos sustanciales de derechos sociales. Con toda certeza, hay sentencias que podrían haberse incluido o excluido, con criterios igualmente justificables. De todas formas, pensamos que el presente trabajo brinda un panorama razonable de lo que la Corte argentina ha expresado sobre derechos sociales en 2018.

Al lanzar a circulación este texto, nos anima la esperanza de que podrá ser útil como material de consulta y base de discusión para todas aquellas personas que –desde las más diversas situaciones– reclaman, impulsan y defienden los derechos sociales.

## 2018: Qué hizo la Corte en derechos sociales

El tribunal renueva su máxima autoridad durante 2018. A partir del 1 de octubre, Carlos Rosenkrantz —designado a propuesta del presidente Mauricio Macri— se convierte en el titular de la Corte Suprema<sup>1</sup>. Según consta en la Acordada 29 del 11 de septiembre de 2018<sup>2</sup>, Rosenkrantz recibe cuatro votos: los de los vocales Elena Highton, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, a los que suma el suyo propio. Juan Carlos Maqueda vota por la continuidad de Lorenzetti. La misma Acordada confirma a la ministra Highton como vicepresidenta del cuerpo.

El mandato en curso de Lorenzetti —presidente desde 2007— se extendía hasta el 31 de diciembre de 2018. Sin embargo, la Acordada 29 afirma que “es aconsejable” hacer una excepción al reglamento. Fija el 1 de octubre como fecha de asunción del nuevo titular. El período iniciado concluye el 30 de septiembre de 2021.

Durante el año se mantuvo la composición del tribunal, con integrantes designados bajo tres mandatos presidenciales distintos: Maqueda, en el de Eduardo Duhalde; Lorenzetti y Highton<sup>3</sup>, en el de Néstor Kirchner; Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, por último, se unieron a la Corte en la segunda mitad de 2016, bajo la presidencia de Mauricio Macri<sup>4</sup>.

El tribunal introdujo a fines de 2018 una práctica novedosa. Publicó un cronograma de cuatro sentencias a dictarse en los últimos 45 días del año, referidas a cuestiones que la Corte consideraba de impacto público: el cobro de impuesto a las ganancias a integrantes de la magistratura designados después de 2017, la aplicación de la ley del “2 x 1” en casos de lesa humanidad, el sistema electoral de lemas en la provincia de Santa Cruz y la definición del índice aplicable al nivel inicial del haber de retiro<sup>5</sup>. Los dos primeros fallos apuntaban a afianzar la legitimidad pública de la Corte. Se destaca especialmente “Batalla” (2018)<sup>6</sup>, sentencia que —por

<sup>1</sup> <https://www.cij.gov.ar/nota-31992-Carlos-Rosenkrantz-asume-como-presidente-de-la-Corte-Suprema-de-Justicia-de-la-Naci-n.html> (consultado 01 Dic 2019).

<sup>2</sup> Disponible en <https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=111978> (consultado 01 Dic 2019).

<sup>3</sup> Highton cumplió 75 años en diciembre de 2017, pero no se le aplicó el artículo 99 inciso 4 de la CN ya que fue amparada por una sentencia de primera instancia emitida el 10 Feb 2017. La decisión quedó firme al no ser recurrida por el Gobierno. Véase: <https://www.cij.gov.ar/nota-24789-El-juez-Lavi--Pico-hizo-lugar-a-un-amparo-presentado-por-Elena-Highton-de-Nolasco--vicepresidenta-de-la-Corte-Suprema.html> (consultado 01 Dic 2019).

<sup>4</sup> Cuatro días después de asumir la presidencia, Mauricio Macri designó a Rosenkrantz y Rosatti “en comisión” mediante el decreto 83/2015. En la misma norma se ordenaba abrir el trámite previsto en el decreto 222/2003. Sin embargo, Rosatti y Rosenkrantz no asumieron hasta que la Cámara de Senadores otorgó su acuerdo en junio de 2016. Véase Andrés Rossetti y Horacio Etchichury, “Siete días después: ¿golpe institucional o mero cumplimiento de la Constitución?”, *Comercio y Justicia*, 21 Dic 2015, pág. 13A, disponible en: <http://t.co/rN3EmnHVo2> (consultado 01 Dic 2019). Acerca del perfil de los dos ministros, pueden consultarse, entre muchas otras fuentes, las piezas periodísticas “Quiénes son Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, los nuevos jueces de la Corte Suprema”, *Infobae*, 16 Jun 2016: <http://www.infobae.com/politica/2016/06/16/quienes-son-carlos-rosenkrantz-y-horacio-rosatti-los-nuevos-jueces-de-la-corte-suprema/> (consultado 01 Dic 2019); “Quién es y cómo llegó Carlos Rosenkrantz a la Corte Suprema de Justicia”, *La Nación*, 22 Ago 2016: <https://www.lanacion.com.ar/1930438-quien-es-y-como-llego-carlos-rosenkrantz-a-la-corte-suprema-de-justicia> (consultado 01 Dic 2019); “9 definiciones de Carlos Rosenkrantz antes de asumir en la Corte Suprema”, *Infobae*, 03 Ago 2016, <https://www.infobae.com/politica/2016/08/03/9-definiciones-de-carlos-rosenkrantz-antes-de-asumir-en-la-corte-suprema/> (consultado 01 Dic 2019).

<sup>5</sup> <https://www.cij.gov.ar/nota-32465-CALENDARIO-DE-DICTADO-DE-SENTENCIAS.html> (consultado 01 Dic 2019).

<sup>6</sup> La decisión se tomó en el marco del recurso de hecho planteado por la defensa de Rufino Batalla en la causa “Hidalgo Garzón, Carlos del Señor y otros s/ inf. art. 144 bis inc. 1 —último párrafo— según ley 14.616, privación ilegal libertad agravada (art. 142 inc. 1), privación ilegal libertad agravada (art. 142 inc. 5), inf. art. 144 ter 1º párrafo —según ley 14.616—, inf. art. 144 ter 2º párrafo —según ley 14.616—, homicidio agravado con ensañamiento —alevosía, sustracción de menores de diez años (art. 146) —texto original del C.P. ley 11.179 y supresión del est. civ. de un menor”, *Fallos*, 341:1768.

mayoría– declaró inaplicable a los casos de lesa humanidad la ley 24.390 (o “ley del 2 x 1”). Así revirtió, con la disidencia de Rosenkrantz, la doctrina asentada en “Muiña” (2017)<sup>7</sup>, el fallo que motivó una amplia repulsa social y la aprobación acelerada de una ley “interpretativa” que llevó el número 27.362.

De los cuatro expedientes incluidos en el cronograma, solo el último aborda derechos sociales. Se trata del caso “**Blanco**”, referido a materia previsional, donde la Corte resolvió a favor del jubilado y en contra de la ANSeS. El tribunal estableció que las remuneraciones contempladas para calcular el haber inicial debían actualizarse –para el período previo a la sanción de la ley 26.417– según el índice de salarios básicos de la industria y la construcción (ISBIC), tal como solicitaba el jubilado. A la vez, declaró inconstitucionales de oficio –por invadir atribuciones del Poder Legislativo– las resoluciones de ANSeS y de la Secretaría de Seguridad Social que fijaron un índice distinto, basado en la evolución de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE). La decisión, por supuesto, solo abarcaba al caso individual planteado. Si bien la Corte comunicó al Congreso la decisión para que legisle en la materia, ello no le impidió aplicar una solución propia al caso. En ese sentido, el fallo se asemeja a “Badaro” (2007)<sup>8</sup> y no a “Badaro” (2006)<sup>9</sup>.

Confirmando una visión estricta en materia de seguridad social, en “**Rapisardi**” el tribunal –con la disidencia de Rosatti– rechazó acreditar incapacidad laboral si no se alcanza el porcentaje fijado en la ley, tal como había hecho en “Sosa” (2017)<sup>10</sup>. La decisión en “**Albornoz**” aseguró que la indemnización por fallecimiento de un trabajador con más de un empleador debe ser abonada de modo íntegro por cualquiera de ellos, solidariamente. Por otra parte, la Corte anuló en “**Zaragoza**” una sentencia que denegó la pretensión de cobro de AUH, debido a que el tribunal inferior no había dado intervención al ministerio pupilar. La decisión en “**Tejera**” precisó que la AUH es una prestación periódica; por ello, el amparo en discusión no controvertía un acto único de la Administración, sino que la omisión cuestionada tenía carácter continuo. Ello se vuelve relevante para definir el plazo para interponer válidamente un amparo.

Otro grupo de casos se centró en las indemnizaciones por accidentes de trabajo. Por una parte, en “**Díaz García**” el tribunal –con disidencia de Rosatti– volvió a revertir decisiones de una sala de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, por apartarse de la doctrina fijada en “Espósito” (2016)<sup>11</sup>. Ya lo había hecho anteriormente en “Marando” (2017)<sup>12</sup>, donde no votaron Rosenkrantz ni Rosatti. Por otra parte, “**Páez Alfonso**” determinó –nuevamente con disidencia de Rosatti– que una indemnización adicional prevista en la ley 26.773 no se aplica a los accidentes *in itinere*. “**Palacín**” y “**Molina**”, a su turno, favorecieron un criterio estricto para determinar la responsabilidad de la ART por omisiones en su deber de prevención.

La Corte señaló en “**Rica**” que el vínculo entre un profesional médico y el centro de salud privado donde actúa no necesariamente tiene carácter laboral, sino que puede encuadrarse como locación de servicios. En una línea similar, “**Correcher Gil**” sostuvo que la actividad de una persona en una asociación civil sin fines de lucro puede configurar un voluntariado social y no una relación laboral. En relación al personal de casas particulares, “**Ortiz**” dejó en claro que corresponde aplicar las escalas salariales fijadas por las autoridades nacionales.

Respecto al despido discriminatorio, el tribunal precisó en “**Varela**” que –una vez acreditada

<sup>7</sup> En aquella ocasión se trataba del recurso de hecho interpuesto por la defensa de Luis Muiña en la causa “Bignone, Reynaldo Benito Antonio y otro s/ recurso extraordinario”, *Fallos*, 340:549.

<sup>8</sup> “Badaro, Adolfo Valentín c/ Anses s/ reajustes varios”, *Fallos*, 330:4866.

<sup>9</sup> “Badaro, Adolfo Valentín c/ Anses s/ reajustes varios”, *Fallos*, 329:3089.

<sup>10</sup> “Sosa, Raúl c/ ANSeS s/ retiro por invalidez (art. 49 P4 ley 24.241)”, *Fallos*, 340:2021 [véase *desco17*, caso 08].

<sup>11</sup> “Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente -ley especial”, *Fallos*, 339:781 [véase *desco16*, caso 17].

<sup>12</sup> “Marando, Catalina Graciela c/ QBE Argentina ART S.A. s/ accidente – ley especial”, *Fallos*, 340:1259 [véase *desco17*, caso 14].

de modo verosímil la causal prohibida–, la parte empleadora puede todavía justificar su acción si demuestra que existió “cualquier otro motivo [no discriminatorio], de la naturaleza que fuere”, lo que da lugar a un despido sin causa y al pago de indemnización. La sentencia destacó que esa modalidad de cese no está vedada constitucionalmente. Cabe recordar que en “Pellicori” (2011)<sup>13</sup> la Corte había señalado que, para descartar la discriminación, el motivo invocado por la patronal debía ser “objetivo y razonable”. En “**Farrell**” el tribunal adoptó un enfoque más amplio al momento de evaluar si existió discriminación, por su carácter solapado: no es necesario que la causal prohibida surja de la comunicación misma del despido. Una posición similar adoptó en “**Caliva**”: aunque la trabajadora no haya notificado formalmente el embarazo al empleador, el despido puede haberse fundado en esa condición.

La negativa de un organismo provincial a reparar un inmueble de su propiedad en condición de inhabitable afecta –señaló la Corte en “**Gómez, Lucía**”– el derecho de sus legítimos ocupantes a la vida, la salud y la vivienda. En otro expediente, una decisión de la Corte en marzo puso fin a casi cuatro años de discusión sobre la competencia de los tribunales que debían entender en el amparo de una madre contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tendiente a lograr la inclusión en un programa de atención a familias en situación de calle<sup>14</sup>.

En otro orden, frente a una larga línea de casos –iniciada en “P., A.” (2015)<sup>15</sup>– con lecturas estrictas del derecho a la salud, en “Y., M. V.” el tribunal adoptó la interpretación de la ley aplicable más favorable al acceso a tratamientos de reproducción humana asistida. Sin embargo, remarcó –en “T., I. H.”– que el derecho a la salud de las personas con discapacidad no abarca la cobertura de actividades deportivas o recreativas. La decisión en “**Olivo**” hizo lugar a una medida cautelar que solicitaba proveer una silla de ruedas a una niña con discapacidad, aunque el tribunal declaró su incompetencia para tratar el caso en la instancia originaria<sup>16</sup>.

La Corte garantizó en “V., M. C.” el derecho a contar con un defensor público en el marco de un proceso para determinar la capacidad de una persona, pese a que previamente se la había excluido de esa posibilidad por contar con algunos bienes. “**Asociación Francesa**” rechazó, en cambio, que un niño con discapacidad pueda tener –por esas condiciones– prioridad en la verificación de créditos de la quiebra del centro médico cuya mala praxis le afectó<sup>17</sup>. Por último, el tribunal declaró inconstitucional–en “**González Victorica**”– la norma que restringe el alcance de las franquicias a personas con discapacidad para importar automóviles de acuerdo a la capacidad económica de sus familias. Convalidó, en cambio, aquellas limitaciones basadas en el patrimonio del individuo solicitante.

En síntesis, durante 2018 la Corte transitó hacia un nuevo liderazgo, de asunción anticipada,

<sup>13</sup> “Pellicori, Liliana Silvia c/ Co legio Público de Abogados de la Capital Federal s/ amparo”, *Fallos*, 334:1387.

<sup>14</sup> Se trata de la resolución dictada el 13 Mar 2018 en “A. L., P. el GCBA s/ amparo” (Competencia - CSJ 002208/2016/CS001). La Corte definió que el expediente debía tramitarse en la justicia porteña. Por tratar cuestiones de competencia, el fallo no está relevado en esta publicación.

<sup>15</sup> “P., A. c/ Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas Discapacitadas y otro s/ amparo”, *Fallos*, 338:488 [retomado en decisiones posteriores; véase *desco16*, caso 47].

<sup>16</sup> También merece una mención la decisión en “S., E. L. c/ Asociación Médica del Departamento de Castellano s/ amparo” (27 Feb 2018; CSJ 002415/2017/CS001; no publicado en *Fallos*). Allí la Corte –por remisión al dictamen de Procuración– resolvió que un amparo contra una empresa de medicina prepaga debe tramitarse ante la Justicia federal si el reclamo tiene virtualidad para afectar el sistema nacional de salud, más allá de que la ley 26.682 no contemple expresamente la prerrogativa del fuero federal. Por tratarse de un fallo sobre cuestiones de competencia, no está relevado en el presente texto. Por los mismos fundamentos y en la misma fecha, el tribunal dictó igual solución en “B., J. M. c/ Prevención Salud s/ amparo” (CSJ 2464/2017/CS1).

<sup>17</sup> Pocos meses después (26 Mar 2019), se dictó una resolución diferente en “Institutos Médicos Antártida s/ quiebra s/ inc. de verificación (R.A.F. y L.R.H. de F)”, *Fallos*, 342:459. Allí la Corte dispuso verificar un crédito con privilegio especial prioritario de cualquier otro privilegio a favor de B.M.F. por un crédito originado en una indemnización por mala praxis. El resultado cambió por el voto propio de la conjeza Graciela Medina, en reemplazo del ministro Rosenkrantz.



e intentó recuperar la legitimidad pública afectada por el fallo de 2017 en materia de lesa humanidad. En ese marco se inscriben, probablemente, la adopción de una agenda de casos y el fallo sobre el índice para actualizar ciertas obligaciones previsionales, con el que enfrentó explícitamente la postura del Gobierno en funciones. Sostuvo sus criterios favorables a limitar la responsabilidad de las ART, y rescató la vigencia de figuras como la locación de servicios y el voluntariado en coexistencia con la relación laboral. Si bien mantuvo –a primera vista– sus criterios en materia de despido por discriminación, quizá haya ampliado las posibilidades de justificación de empleadores. También puede reconocerse la continuidad de un enfoque estricto en materia de cobertura de prestaciones por discapacidad, una línea iniciada hace ya por lo menos cuatro años. Sin grandes novedades en materia de derechos sociales<sup>18</sup>, el tribunal insistió en las líneas transitadas durante 2016 y 2017: interpretación estricta, prescindencia del control de constitucionalidad de leyes y normas inferiores y menor recurrencia a fuentes internacionales de jerarquía constitucional (en particular, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad).

*Magdalena Inés Álvarez y Horacio Javier Etchichury*

*Córdoba, diciembre de 2019.*

---

<sup>18</sup> La periodista Irina Hauser destaca, en este período, que la Corte declaró inadmisibile el recurso contra la sentencia que –a pedido de la Unión Tranviarios Automotor (UTA)– revocó el otorgamiento de personería gremial a la asociación de empleados del subterráneo y ordenó reiniciar el proceso administrativo ante el Ministerio de Trabajo (véase Irina Hauser, *Rebelión en la Corte: los Supremos en la era Macri*, Planeta, Buenos Aires, 2019, pp. 72-73). Por tratarse de un fallo que simplemente declara la inadmisibilidad, no está relevado en la presente publicación.

# [1] Derecho a jubilaciones y pensiones móviles

## Caso N° 01

### “Governatore” (2018)

*La legislación previsional no permite exigir por vía reglamentaria una cantidad mínima de aportes para otorgar pensiones por fallecimiento de un afiliado en actividad.*

22 May 2018

#### **Autos**

“Governatore, Carina C. c/ ANSES s/ pensiones”. FRO 13009794/2009/CS1 y otro. [No publicado en *Fallos*]

#### **Hechos y trámite previo**

Por remitir a fallos anteriores, no hay descripción detallada de hechos y trámite. En principio, se trata de un caso en que se reclaman prestaciones previsionales en casos donde el Estado alega la ausencia de una cantidad requerida de aportes.

#### **Principales antecedentes citados**

- “Tarditti” (2006): “Tarditti, Marta Elena c/ ANSeS s/ pensiones”. 07 Mar 2006. *Fallos*, 329:576.
- “Chiesa” (2015): “Chiesa, Humberto Juan c/ ANSeS s/ retiro por invalidez”. 30 Jun 2015. *Fallos*, 338:525.

#### **Cuestión**

¿Corresponde pagar la pensión por muerte del afiliado en actividad si no se cumple el mínimo de meses de aportes requerido por la reglamentación?

#### **Respuesta del tribunal**

Highton, Lorenzetti, Maqueda y Rosatti, por remisión a “Tarditti” (2006) y “Chiesa” (2015), sostuvieron que corresponde otorgar la pensión a la viuda del afiliado en actividad.

#### **Argumentos centrales**

Siguiendo las pautas de “Tarditti” (2006) y “Chiesa” (2015), la Corte señaló que al momento de su muerte, el afiliado estaba formalmente incluido en el sistema y hacía aportes regularmente. La legislación aplicable (ley 24.241) no habilita al poder administrativo a establecer por vía reglamentaria períodos mínimos de cotizaciones como condición para otorgar la pensión por fallecimiento.

## Caso N° 02

### “Benoist” (2018)

*El régimen general de jubilaciones y pensiones vigente (ley 24.241) no establece una tasa de sustitución única entre el ingreso en actividad y el haber jubilatorio, por lo que no existe un vacío legislativo que deba llenarse por remisión a otras normas.*

12 Jun 2018

### Autos

“Benoist, Gilberto c/ ANSeS s/ previsional ley 24.463”. FRE 12001599/2006/1/RH1. *Fallos*, 341:631.

### Hechos y trámite previo

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia revocó parcialmente la sentencia de grado que había admitido la demanda de reajuste del haber jubilatorio del actor. Por una parte, confirmó el reconocimiento de la movilidad del haber según el criterio sentado en “Badaro” (2006) y “Badaro” (2007). En lo referido a la actualización del haber inicial, estimó que la “prestación compensatoria” y la “prestación adicional por permanencia” debían ajustarse hasta la fecha de adquisición del derecho, sin la limitación temporal impuesta por la Resolución 140/95 de ANSeS, aplicando el ISBIC de acuerdo a los parámetros establecidos por la Corte en “Elliff” (2009).

Por otro lado, sostuvo que el haber inicial era insuficiente, por existir una indebida desproporción entre el haber en actividad y el haber previsional. Afirmó que el mismo, por su carácter sustitutivo, debía mantener una proporción justa y razonable con las remuneraciones de los sujetos activos. En relación a la insuficiencia de ese primer haber alegada por el actor, sostuvo que era una lesión que no podía repararse mediante las soluciones adoptada ya que la ley 24.241 no fijaba para las prestaciones ordinarias una tasa de sustitución entre el monto de la jubilación y el promedio de las remuneraciones de los últimos años de actividad, como lo había hecho para el retiro por invalidez y la pensión por fallecimiento, para los cuales previó una pauta del 70%. Esa omisión –afirmó– debía suplirse mediante la integración normativa prevista en el art. 156 de la propia ley 24.241: allí remite a la aplicación de la ley 18.037 en los supuestos no previstos. Por ello, la Cámara empleó el art. 49 de esta última norma, donde se establece que el beneficio no puede ser menor al 70% del promedio de las remuneraciones actualizadas de los últimos diez años a computar. Señaló que cualquier cifra inferior resultaba insuficiente y confiscatoria.

Contra esta decisión ANSeS dedujo recurso extraordinario cuya denegación dio origen a la presente queja.

### Principales antecedentes citados

- “Heen” (1992): “Heen Moon Young. s/ interpone apelación c/ resolución”. *Fallos*, 315:1922. 08 Sep 1992.
- “Santillán” (1998): “Santillán, Francisco Agustín s/ recurso de casación”. *Fallos*, 321:2021. 13 Ago 1998.
- “Dengler” (1998): “Dengler, Eduardo Federico c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos”. *Fallos*, 321:245. 01 Sep 1998.
- “Urquía Peretti SA” (1999): “Urquía Peretti SA c/ Dirección General Impositiva s/ contencioso administrativo”. *Fallos*: 322:2189. 16 Sep 1999.
- “Badaro” (2006): “Badaro, Adolfo Valentín c/ ANSeS s/ reajustes varios”. *Fallos*: 329:3089. 08

Ago 2006.

- “Club 20 de Febrero” (2006), “Club 20 de Febrero c/ Estado Nacional y/o Adip S/Acción Meramente Declarativa”. *Fallos*, 329:4007. 26 Sep 2006.

- “Badaro” (2007): “Badaro, Adolfo Valentín c/ ANSeS s/ reajustes varios”. *Fallos*, 330:4866. 26 Nov 2007.

- “Elliff” (2009): “Elliff, Alberto José c/ ANSeS s/ reajustes varios”. *Fallos*, 332:1914. 11 Ago 2009.

### **Cuestión**

¿Existe una omisión legislativa en la ley 24.241 respecto a la tasa de sustitución en las jubilaciones ordinarias, por la que corresponda aplicar supletoriamente el método de cálculo de la ley 18.037?

### **Respuesta del tribunal**

Por unanimidad la Corte rechazó la existencia de tal omisión, señalando que el reclamo del actor está contemplado y puede resolverse conforme la ley 24.241; por lo tanto, no es aplicable ninguna pauta de la ley 18.037.

### **Argumentos centrales**

En primer término, la CSJN sostuvo que el encuadramiento legal realizado por la Cámara es erróneo. El tribunal inferior declaró la existencia de un supuesto no contemplado en la ley 24.241 y aplicó –en consecuencia– la ley 18.037, sin analizar exhaustivamente la normativa en cuestión, lo que hubiese conducido a una solución opuesta. Así contradijo el criterio interpretativo establecido por la propia Corte en numerosas causas, según el cual no cabe presumir que el legislador actúe con inconsistencia o imprevisión al momento de dictar las leyes.

## **Caso N° 03**

### **“Díaz” (2018)**

*Al modificar unilateralmente normas locales relativas al sistema de reciprocidad previsional con la Nación, una provincia transgrede la supremacía del derecho federal y puede frustrar el derecho a la seguridad social.*

27 Nov 2018

### **Autos**

“Díaz, Ada c/ Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba s/ plena jurisdicción - recurso directo - hoy casación.”. CSJ 923/2016/RH1. *Fallos*, 341:1708.

### **Hechos y trámite previo**

El TSJ de Córdoba revocó la sentencia de cámara que había declarado inconstitucional el art. 61 de la ley local 8024 y nula la resolución 307.090 de la Caja previsional de la provincia y, en consecuencia, reconocido el beneficio de pensión solicitado por la actora. La decisión del máximo tribunal provincial se basó en que el art. 61 de la ley citada no permite computar servicios no prestados efectivamente aunque estén reconocidos en otros sistemas vinculados por reciprocidad con la Caja cordobesa; esto no permite incorporar 7 años de aportes del causante ante el régimen de autónomos.

Contra esa decisión la actora interpuso recurso extraordinario, cuyo rechazo motivó la presentación

en queja.

### Principales antecedentes citados

- “Rodríguez” (2007): “Rodríguez, María c/ Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba s/ recurso de inconstitucionalidad”. *Fallos*, 330:2786. 12 Jun 2007.
- “Alaniz” (1989): “Alaniz, Raúl Antonio c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Bs.As. s/ demanda contencioso – administrativa”. *Fallos*, 312:532. 18 Abr 1989.
- “Castoldi” (1992): “Castoldi, Víctor E. c/ Caja de Retiros, Jub. y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires s/ demanda contencioso – administrativa”. *Fallos*, 315:1597. 13 Ago 1992.
- “Aguirre” (1958): “Aguirre, Raúl Emilio c/ Prov. de Santa Fe”. *Fallos*, 242:141. 27 Oct 1958.
- “Ramallo” (2016): “Ramallo, Roberto Antonio Edgardo c/ Estado Provincial y Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos s/ demanda contencioso - administrativa”. CSJ 371/2013 (49-R) /CS1. 29 Mar 2016.
- “Mahli de Ciarlotti” (1997): “Mahli de Ciarlotti, Haydée c/ Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social)”. *Fallos*, 320:2201. 14 Oct 1997.

### Cuestión

¿Es constitucional la norma local que no permite computar para acceder al beneficio previsional los servicios no prestados efectivamente o declarados por cuentapropistas antes o después de la afiliación a la Caja provincial, incluso si los aportes correspondientes están reconocidos por otros regímenes de reciprocidad?

### Respuesta del tribunal

Por voto unánime de los cinco ministros de la Corte –que remitieron al dictamen de la Procuración–, se declaró inconstitucional el art. 61 incs. a y d, de la ley local 8024 y –confirmando en lo pertinente la sentencia de la Cámara– se reconoció el derecho de la actora a la pensión solicitada.

### Argumentos centrales

El dictamen retomó fallos previos de la Corte referidos al sistema nacional de reciprocidad previsional. Destacó que en “Rodríguez” (2007) el máximo tribunal sostuvo que el sistema de reciprocidad previsional tiene como “objeto cardinal ampliar el campo de derechos jubilatorios, creando una antigüedad única generada por el cómputo de servicios prestados sucesivamente bajo distintos regímenes como si todos ellos lo hubieran sido bajo la Caja Jubilatoria”. Ello resulta, además, de acuerdos formalizados entre autoridades locales y federales. Las provincias firmantes no pueden a partir de entonces modificar unilateralmente los términos de esa adhesión mediante reformas de su legislación previsional, porque estarían violando el principio de supremacía del derecho federal (art. 31, CN), tal como la Corte señaló en “Aguirre” (1958), “Alaniz” (1989), “Castoldi” (1992) y “Ramallo” (2016). De lo contrario, podrían frustrar el derecho a la seguridad social, consagrado en la CN y en tratados de igual jerarquía.

Estas razones conducen –según el dictamen– a invalidar las disposiciones del art. 61 de la ley 8024, ya que sus exigencias exceden lo previsto en el art. 1 del decreto-ley 9316/1946 (ratificado por ley 12.921), que declara “computables para la obtención de las distintas prestaciones establecidas en los regímenes de cada una de las secciones del Instituto Nacional de Previsión Social y de la Caja Municipal de Previsión Social de la Ciudad de Buenos Aires, los servicios prestados sucesiva o simultáneamente, bajo el régimen de una o de diversas Secciones o Cajas, previo reconocimiento de los mismos por la Sección o Caja a que corresponda”.

El desconocimiento –a partir de la norma local– de servicios reconocidos por la ANSeS implica una modificación unilateral de las pautas básicas del sistema nacional de reconocimiento y reciprocidad entre regímenes previsionales, lo que que transgrede el orden normativo federal.

## **Caso N° 04**

### **“Blanco” (2018)**

18 Dic 2018

#### **Autos**

“Blanco, Lucio Orlando c/ ANSeS s/ reajustes varios”. CSS 42272/2012/CS1-CA1. *Fallos*, 341:1924.

#### **Hechos y trámite previo**

Confirmando la sentencia de primera instancia y aplicando los criterios fijados por la Corte en “Elliff” (2009), la Cámara Federal de la Seguridad Social ordenó actualizar el haber de un jubilado mediante el ISBIC para el período previo a la entrada en vigor de la ley 26.417 (ley de movilidad jubilatoria). ANSeS recurrió la decisión, señalando que debía aplicarse el índice RIPTÉ, tal como se estableció en el decreto 807/2016 y en la ley 27.260. Luego de interpuesto el recurso, ANSeS dictó la resolución 56/2018 (confirmada por la Secretaría de Seguridad Social mediante resolución 1/2018) que ordena emplear el RIPTÉ como pauta de actualización para el periodo en discusión.

#### **Principales antecedentes citados**

- “Badaro” (2006): “Badaro, Adolfo Valentín c/ Anses s/ reajustes varios”. *Fallos*, 329:3089. 08 Ago 2006.
- “Elliff” (2009): “Elliff, Alberto José c/ ANSES s/ reajustes varios”. *Fallos*, 332:1914. 11 Ago 2009.
- “Rodríguez Pereyra” (2012): “Rodríguez Pereyra, José Luis y otra c/ Ejército Argentino s/ daños y perjuicios”. *Fallos*, 335:2333. 27 Nov 2012.
- “Busquets de Vítolo” (1998): “Busquets de Vítolo. Adelina c/ Provincia de Mendoza”. *Fallos*, 321:2181. 13 Ago 1998.

#### **Cuestión**

¿Quién tiene facultad para determinar el índice de la movilidad jubilatoria? ¿Qué índice corresponde aplicar en el caso?

#### **Respuesta del tribunal**

El voto mayoritario, suscripto por Lorenzetti, Highton, Rosatti y Maqueda, señaló que corresponde al Poder Legislativo –y no al Ejecutivo– definir el índice de la movilidad jubilatoria, y ordenó aplicar al caso el ISBIC; asimismo, resolvió poner la decisión en conocimiento del Congreso para que defina la pauta de actualización.

Highton, en un voto concurrente,

Rosenkrantz disiente: la fijación del índice no es atribución exclusiva del Congreso y la normativa

vigente deja la decisión en manos de la Administración; en consecuencia, corresponde aplicar el RIPTE.

### **Argumentos centrales**

Luego de precisar que el decreto 807/2016 y la ley 27.260 resultaban inaplicables al caso –por tratarse de una jubilación otorgada antes de agosto de 2016, no incluida voluntariamente en el plan de reparación histórica–, la mayoría sostuvo que la ANSeS y la Secretaría de Seguridad Social carecían de facultades para fijar un índice de actualización aplicable al período en discusión (1994-2003). La atribución corresponde exclusivamente al Congreso; se delegó en la Administración mediante el art. 24 de la ley 24.241, y ANSeS definió –en virtud de esa delegación– el ISBIC como criterio aplicable. Luego, con la sanción de la ley 26.417 en 2008, el Congreso reasumió la facultad y estableció una nueva fórmula de movilidad para las remuneraciones devengadas desde la sanción de la ley. Por lo tanto, la Administración ya no tiene facultades delegadas para establecer el índice de recomposición, más allá de que algunas cláusulas de la ley 24.241 (y sus modificatorias) confían –de modo genérico– a la ANSeS y a la Secretaría de Seguridad Social tareas de reglamentación o de cálculo (cons. 16 y 17). Por lo tanto, las resoluciones de la Administración invocadas invaden atribuciones parlamentarias; corresponde declarar su inconstitucionalidad de oficio. Hasta tanto el Congreso fije el índice aplicable al período en discusión, debe utilizarse el ISBIC, establecido por ANSeS en 1994 ejerciendo facultades que se le habían delegado.

El voto concurrente de Highton sigue líneas argumentales similares, pero se distingue en que determina la nulidad –y no la inconstitucionalidad– de las resoluciones de 2018 esgrimidas por ANSeS (cons. 18).

Rosenkrantz, en su disidencia, sostiene que la Administración sí tenía facultades para definir –como lo hizo en las resoluciones invocadas– el índice. Dado que a lo largo de la historia no siempre el legislador ha ejercido por sí mismo esa atribución, el voto disidente entiende que no es una atribución exclusiva del Congreso (cons. 10). En el caso bajo estudio, la ley 24.241 mantuvo la obligación de actualizar las jubilaciones (art. 24); al no fijar explícitamente el criterio, “no puede sino concluirse” que la norma deja la cuestión a cargo de la Administración (cons. 11). Citando la “tradición constitucional”, Rosenkrantz sostiene que la potestad reglamentaria incluye las acciones imprescindibles para cumplir la directiva legal: en este caso, fijar el índice de recomposición.

### **Observaciones**

En el considerando 24, el voto de la mayoría afirma que “goza de amplio consenso” el principio de justicia establecido por John Rawls en su *Teoría de la justicia* (1971).

A diferencia de “Badaro” (2006), la comunicación al Congreso para que defina el índice aplicable no impide a la Corte (en su voto mayoritario) ordenar la aplicación de un índice de actualización.

## [2] Derecho a la seguridad social

### Caso N° 05

#### “Tejera” (2018)

*La AUH es una prestación de carácter periódico.*

22 Mar 2018

“Tejera, Valeria Fernanda c/ ANSES y otros s/ varios”. FRO 073023789/2011/CS001. *Fallos*, 341:274.

#### Hechos y trámite previo

Tejera, quien se encontraba en una precaria situación laboral y era madre de un niño con una seria discapacidad, petitionó a la ANSeS la prestación de la AUH. Le fue conferida y luego revocada, en noviembre de 2009, por entender que –conforme el art. 9 del decreto 1602/09– la AUH era incompatible con la pensión por discapacidad otorgada al niño por la Provincia de Buenos Aires en virtud de la ley 10.205. Contra esta decisión, Tejera presentó dos reclamos administrativos, rechazados luego por ANSeS. Finalmente promovió acción de amparo contra el organismo y el Estado Nacional a fin de que se ordenara rehabilitar el beneficio correspondiente a la AUH, así como el pago retroactivo de las prestaciones que la actora había dejado de percibir desde la revocación.

En primera instancia el juez hizo lugar a la pretensión y ordenó a ANSES continuar brindando la asignación, además de pagar las prestaciones devengadas desde la revocación. Tras el recurso de la demandada, la Cámara revocó –por mayoría– la sentencia de primera instancia. al entender que la demanda de amparo había sido interpuesta pasado el plazo de caducidad de quince días previsto en el art. 2 inc. e de la ley 16.986. Contra esta decisión la actora interpuso recurso extraordinario federal, que fue concedido por la cuestión federal planteada.

#### Principales antecedentes citados

- “Consejo” (1992): “Consejo de Presidencia de la Delegación Bahía Blanca de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos s/ acción de amparo”. *Fallos*, 315:1361. 23 Jun 1992.
- “Barreto” (1997): “Barreto, José y otros c/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/ acción de amparo”. *Fallos*, 320:1789. 21 Ago 1997.
- “Fernández” (1999): “Fernández, Raúl c/ Estado Nacional (PEN) s/ amparo - ley 16.986”. *Fallos*, 322:3008. 07 Dic 2008.
- “Tartaroglu” (2001): “Tartaroglu de Neto, Leonor c/ IOS s/ amparo”. *Fallos*, 324: 3074. 25 Sep 2001.
- “Cooperativa de Trabajo Fast Limitada” (2003): “Cooperativa de Trabajo Fast Limitada c/ Estado Nacional - Poder Ejecutivo de la Nación - dto. 1002/99”. *Fallos*, 326:3180. 01 Sep 2003.
- “Martín” (2004): “Martín, Sergio Gustavo y otros c/ Fuerza Aérea Argentina - Dirección General Bienestar Pers. Fuerza Aérea s/ amparo”. *Fallos*, 327:2127. 08 Jun 2004.
- “Mosqueda” (2006): “Mosqueda Sergio c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y otros s/Amparo”. *Fallos*, 329:4918. 07 Nov 2006.
- “Yapura” (2006): “Yapura, Gloria Catalina c/ Nuevo Hospital El Milagro y Provincia de Salta”. *Fallos*, 329:2179. 06 Jun 2006.
- “María” (2007): “María, Flavia Judith c/ Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos y Estado Provincial s/Acción de Amparo”. *Fallos*, 330:4647. 30 Oct 2007.



- “Rivero” (2009): “Rivero, Gladys Elizabeth c/ s/Amparo”. *Fallos*, 332:1394. 09 Jun 2009.
- “Yapur” (2009): “Yapur, Elvio Alberto c/ Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires s/Amparo”. Y. 36. XLIII. RHE. *Fallos*, 332:1616. 28 Jul 2009.
- “FACA” (2012): “Federación Argentina de Colegios de Abogados c/ EN PJN Consejo Magist. Jurado Enjuicia Resol- 317/06 S/Amparo Ley 16986”. *Fallos*, 335:361. 10 Abr 2012.
- “Koch” (2012): “Koch Lilian Mercedes c/ PEN Ley 25561 Dto 1570/01 214/02 Boston Citi s/Amparo”. *Fallos*, 335:44. 14 Feb 2012.
- “Etchart” (2015): “Etchart Fernando Martín c/ ANSES s/Amparo y sumarísimo” E. 261. XLVIII. RHE. *Fallos*, 338:1092. 27 Oct 2015.

### **Cuestión**

¿Se halla en el caso vencido el plazo previsto por la ley 16.986 para presentar una acción de amparo en reclamo de la prestación de la AUH?

### **Respuesta del tribunal**

Highton, Maqueda y Rosatti, en un voto conjunto, consideraron que no se hallaba vencido el plazo porque debe tenerse en cuenta el carácter periódico de la prestación reclamada.

### **Argumentos centrales**

El tribunal afirmó que si bien la sentencia recurrida carece de carácter definitivo, puede equipararse a una de ese tenor: el fallo recurrido genera daños de imposible reparación ulterior, al estar en juego la prestación para un niño con discapacidad.

Respecto al vencimiento del plazo del art. 2 inc. e de la ley 16.986, la Corte argumentó que la Cámara prescindió de considerar una circunstancia decisiva: el carácter periódico de la prestación reclamada por la peticionaria, en el marco de un conflicto urgente destinado a tutelar derechos que cuentan con reconocimiento directo e inmediato en Tratados Internacionales de Derechos Humanos. La sentencia recurrida omitió ponderar que, en el caso, no se hallaba controvertido un acto único de la Administración sino una omisión de carácter continuo. El beneficio denegado consiste en una “prestación monetaria no retributiva de carácter mensual” para atender situaciones de exclusión de diversos sectores vulnerables.

Finalmente, afirmó que la aplicación de esta doctrina se justifica aun en mayor grado cuando están en juego derechos que trascienden el plano patrimonial y comprometen la salud y la supervivencia misma de los reclamantes

### **Observaciones**

La Corte hizo lugar al recurso, dejó sin efecto la sentencia y devolvió las actuaciones al tribunal de origen para que se dicte un nuevo fallo. Se separó así del dictamen de la Procuración, que había aconsejado expedirse sobre el fondo del asunto (art. 16 de la ley 48), en atención a la naturaleza de los derechos discutidos y el tiempo transcurrido desde el inicio de las actuaciones.

## Caso N° 06

### “Rapisardi” (2018)

*Las pensiones por invalidez solo pueden otorgarse si se cumplen estrictamente los porcentajes de incapacidad laboral requeridos por la legislación.*

23 Ago 2018

#### **Autos**

“Rapisardi, Susana María c/ ANSeS s/ retiro por invalidez (artículo 49 P4 ley 24.241)”. CSJ 513/2014 (50-R) /CS1. *Fallos*, 341:961.

#### **Hechos y trámite previo**

La Sala I de la Cámara Federal de la Seguridad Social revocó el dictamen de la Comisión Médica Central, que pese a indicar que la actora no podía cumplir sus tareas habituales como empleada doméstica, fijó la incapacidad como parcial y permanente en 54,19%. El tribunal declaró, en cambio, que la actora estaba totalmente incapacitada a los fines previsionales. Para ello invocó los fines de la legislación aplicable, orientada a cubrir integralmente los efectos de contingencias sociales, especialmente ante la imposibilidad de cumplir las labores usuales. ANSeS recurrió la decisión, y ante el rechazo del recurso interpuso queja ante la CSJN.

#### **Principales antecedentes citados**

- “Sosa” (2017): “Sosa, Raúl c/ ANSeS s/ retiro por invalidez (art. 49 P4 ley 24.241)”. CSJ 1003/2013 (49-S) /CS1. *Fallos*, 340:2021. [*desco17*, caso 08]

#### **Cuestión**

¿Es válido reconocer –a partir de factores complementarios– una incapacidad laboral total apartándose de los porcentajes fijados por la legislación aplicable?

#### **Respuesta del tribunal**

Lorenzetti, Maqueda y Rosenkrantz, remitiendo a su voto en “Sosa” (2017), coincidieron en que no corresponde acreditar incapacidad laboral si no se cumple el porcentaje requerido por la ley. Highton se remitió a su voto concurrente en el mismo fallo.

Rosatti, en su disidencia, consideró que la sentencia recurrida no era arbitraria, por lo que debía rechazarse la presentación directa.

#### **Argumentos centrales**

El voto mayoritario en “Sosa” (2017) juzgó arbitraria la sentencia recurrida por contradecir el texto expreso de la ley, que no ofrece ambigüedad ni oscuridad. Aun admitiendo que algunos fallos previos permitían atenuar el rigorismo legal en materia previsional, los tres ministros sostuvieron que ello no habilita apartarse de la norma. En el mismo fallo, Highton hizo explícito el cambio de criterio en su voto concurrente.

La disidencia de Rosatti en este fallo, en cambio, enfatizó que la incapacidad profesional implica la imposibilidad de realizar las tareas para las que la persona está calificada. Recordó que la propia ley 24.241 prevé el dictado de decretos reglamentarios que traten la calificación profesional como

factor complementario de incapacidad, ponderando edad y nivel de formación. Rosatti destacó que los decretos 1290/94 y 478/98 no cumplieron adecuadamente ese mandato legal. Ante ello, la Cámara resolvió adecuadamente, atendiendo a los fines de la ley 24.241.

### **Observaciones**

Rosatti no votó en “Sosa” (2017). Su disidencia en el presente fallo motiva su inclusión en esta publicación.

El voto concurrente de Highton en “Sosa” (2017) admitió que la Corte “en reiteradas oportunidades” había considerado que “la exigencia de un 66% de minusvalía requerida por las normativas aplicables no debía ser interpretada de una manera rigurosa”. Sin embargo, agregó que “en un nuevo examen de la cuestión, esta Corte estima pertinente adoptar un criterio riguroso en la ponderación de los requisitos de admisibilidad del beneficio [...] que se atenga -primariamente- a la literalidad de la normativa [...], con el objeto de poner límite a situaciones abusivas que derivaron de la precedente laxitud interpretativa, y de preservar el patrimonio del organismo previsional” (cons. 5).

## **Caso N° 07**

### **“Zaragoza” (2018)**

*Es nula la decisión que deniega la pretensión de cobro de la AUH si en ninguna instancia del proceso se le dio intervención al ministerio pupilar.*

30 Oct 2018

### **Autos**

“Zaragoza, Alejandra Graciela c/ ANSES s/ sumarísimo”. FPA 22000686/2010/CS1. [No publicado en *Fallos*]

### **Hechos y trámite previo**

La Cámara de Apelaciones de Paraná, al rechazar la apelación deducida por la parte actora, confirmó la decisión del tribunal inferior que denegó la pretensión de cobro de la AUH a la madre de tres niñas. Contra esta decisión la mujer interpuso recurso extraordinario federal, tachando de nulidad la resolución recurrida por no habersele dado intervención al ministerio pupilar en ninguna instancia. Respecto del planteo de fondo, fundó la pretensión en una interpretación amplia de los derechos de la seguridad social –consagrados en el art. 14 *bis* de la CN– en favor de las tres menores de edad. Señaló que la lectura literal del tribunal había desnaturalizado el propósito y la inteligencia que corresponde a la norma federal en cuestión, donde no se contempla el caso de las actoras como un supuesto de exclusión. Añadió en su recurso que que como madre de las menores no trabaja en relación de dependencia ni tiene ingreso económico alguno, en tanto que el padre percibe una ínfima suma mensual por tareas docentes (por debajo del salario mínimo, vital y móvil), notoriamente insuficiente para cubrir las necesidades alimentarias de sus hijas. Concedido el recurso, la CSJN resolvió dar intervención al Defensor Oficial ante la Corte, que asumió la representación promiscua de las menores (art. 103 del CCC y arts. 35, inc. c, y 43 de la ley 27.149).

### **Principales antecedentes citados**

- “Carballo de Pochat” (2013): “Carballo de Pochat, Violeta c/ ANSES s/ daños y perjuicios”. *Fallos*, 336:1642. 08 May 2013.
- “Rivera” (2010): “Rivera, Rosa Patricia (en nombre y representación de sus hijos menores) c/ Estado Nacional y/o Est. Mayor Gral. Del Ejército Arg. s/ daños y perjuicios. Ordinario”. *Fallos*, 333:1152. 06 Jul 2010.
- “Faifman” (2011): “Faifman, Ruth Myriam y otros s/ Estado Nacional y otros s/ beneficio de litigar sin gastos”. *Fallos*, 334:419. 19 Abr 2011.
- “Rodríguez” (2012): “Rodríguez, Raúl José c/ Covisur S.A.”. R.146.XLVIII. 16 Oct 2012.

### **Cuestión**

¿Es válida la decisión del tribunal *a quo* que confirma la sentencia de primera instancia por la cual se le denegó a la madre de tres niñas el cobro de la AUH si el proceso se tramitó sin dar intervención al ministerio pupilar?

### **Respuesta del tribunal**

El tribunal se pronuncia unánimemente por la nulidad de las actuaciones.

### **Argumentos centrales**

Para el tribunal la decisión es nula porque el proceso ha sido desarrollado con prescindencia de la normativa que impone la obligada participación del Ministerio Pupilar, al estar en juego los intereses de las niñas.

### **Observaciones**

No hay dictamen de la Procuración General. No está publicado en el sitio de la CSJN el escrito presentado por el defensor oficial ante la Corte.

## **Caso N° 08**

### **“Villanueva” (2018)**

*En caso de insuficiencia patrimonial del empleador no asegurado, corresponde al Fondo de Garantía hacerse cargo de la indemnización del trabajador fallecido en un accidente laboral, sin intereses ni costas.*

11 Oct 2018

### **Autos**

“Villanueva, Silvia Marcela y otros c/ La Gruta S.R.L. s/ accidente - ley especial”. CNT

### Hechos y trámite previo

Durante la etapa de ejecución de sentencia en una causa iniciada por los derechohabientes de un trabajador fallecido en un accidente laboral, la jueza de primera instancia declaró el estado de insolvencia del empleador no asegurado, condenado en los términos del art. 29 de la ley 24.557 y del art. 19 del decreto 334/09. A partir de ello, obligó a la SRT –en su carácter de administradora del Fondo de Reserva– a integrar la suma de \$ 2.259.140,80 en concepto de capital, intereses y costas del proceso. La decisión fue confirmada por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Contra esta decisión la SRT interpuso recurso extraordinario por arbitrariedad de sentencia, cuyo rechazo dio lugar a la queja.

### Principales antecedentes citados

- “Ganaderos Unidos” (1967): “Ganaderos Unidos de Wenceslao Escalante c/ B. O., José y otro”. *Fallos*, 269:453. 26 Dic 1967.
- “Imprimex” (1972): “Imprimex Ind. Gráfica S.R.L. c/ Tamplín de Barbero, Inés s/ ordinario”. *Fallos*, 284:263. 24 Nov 1972.
- “D'Ippolito” (1977): “D'Ippolito, Silvano Consuelo s/ hurto”. *Fallos*, 297:106. 01 Mar 1977.
- “Prenova” (1988): “Prenova S.A. c/ Asociación Cooperadora 9 de Julio y otra”. *Fallos*, 311:1516. 18 Ago 1988.
- “Espósito” (2016): “Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ Accidente- ley especial”. *Fallos*, 339:781. 07 Jun 2016. [*desco16*, caso 17]

### Cuestión

¿Quién debe hacerse cargo de la indemnización del trabajador fallecido en un accidente laboral en caso de insolvencia del empleador no asegurado y con qué alcance?

### Respuesta del tribunal

El tribunal, en decisión firmada por los ministros Rosenkrantz, Lorenzetti, Maqueda y Rosatti, calificó a la sentencia como arbitraria, por apoyarse en meras afirmaciones dogmáticas e incurrir en un inequívoco apartamiento de las disposiciones normativas aplicables al caso. Para el tribunal, quien debe hacerse cargo de la indemnización en caso de insolvencia del empleador no asegurado es el Fondo de Garantía –y no el Fondo de Reserva–, sin intereses ni costas.

### Argumentos centrales

La Corte explicó que la situación de insuficiencia patrimonial del empleador no asegurado se encuentra específicamente contemplado en el art. 29 de la ley 24.557: la SRT afronta las indemnizaciones allí previstas con cargo al Fondo de Garantía. Al reglamentar el funcionamiento de ese fondo, el art. 19.5 del decreto 334/96 limitó la cobertura al importe de las prestaciones previstas en la ley, excluyendo expresamente “los intereses, costas y gastos causídicos”. Por ello, los jueces de la causa encuadraron erróneamente la cuestión al pasar por alto estas prescripciones claramente aplicables al caso, donde el obligado es un empleador no asegurado declarado insolvente. Las

decisiones impugnadas, por el contrario, dispusieron que el Fondo de Reserva se hiciera cargo del capital, intereses y costas. Este fondo –administrado por la Superintendencia de Seguro de la Nación (y no por la SRT)– solo se destina a cubrir la responsabilidad de las compañías aseguradoras en estado de liquidación (art. 14 de la ley 24.557).

### **Observaciones**

La jueza de primera instancia, al resolver de la manera en que lo hizo, tuvo como base la doctrina fijada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en fallo plenario N° 328 dictado el 4 de diciembre de 2015 en la causa “Borgia, Alejandro Juan c/ Luz ART SA”. Con la sentencia aquí comentada, la Corte fija una postura distinta a la sostenida por esa Cámara.

## **Caso N° 09**

### **“Albornoz” (2018)**

*En caso de pluridad de empleadores, la responsabilidad de abonar íntegramente la indemnización por fallecimiento del trabajador tiene carácter solidario, sin perjuicio de las acciones civiles que puedan ejercer entre ellos.*

13 Nov 2018

### **Autos**

“Albornoz, María Elena c/ Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires s/ indemnización por fallecimiento”. CNT 21671/2009/1/RH1. *Fallos*, 341:1596.

### **Hechos y trámite previo**

Revocando la sentencia de primera instancia, la Sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo condenó al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires a abonar a la actora la parte proporcional –que le corresponde como derechohabiente– de la indemnización por la muerte del trabajador y de los adicionales previstos legalmente. La Sala reconoció en el caso tres legitimados para el cobro: la actora, en su carácter de conviviente, y los dos hijos mayores de edad del causante. En ese contexto, ordenó al demandado abonar únicamente la tercera parte del total de la liquidación. A su vez, señaló que –según la prueba pericial contable– el Colegio afrontaba el 43% del salario, mientras que el restante 57% era abonado por el Estado Nacional. Por ello el demandado calculó la indemnización por muerte y el resto de los rubros tomando como base solo ese porcentaje.

Contra esta decisión de la Cámara, la actora dedujo el recurso extraordinario federal, cuya denegación dio origen a la queja. En primer lugar, la recurrente definió a la sentencia como arbitraria, por haber reconocido el derecho de los hijos mayores del causante como acreedores de la indemnización, dado que la normativa citada por el tribunal no incluye a los hijos mayores de edad. En segundo lugar, se agravió por el carácter proporcional de la condena, al que consideró insuficiente y violatorio del art. 7 de la ley 17.050, por el cual el Colegio de Escribanos es el responsable exclusivo de los contratos de trabajo y en ese carácter debe cumplir con el pago íntegro de las remuneraciones e indemnizaciones de la LCT. Solo la segunda cuestión fue considerada procedente por la Corte.

**Cuestión**

Si el contrato de trabajo vincula al trabajador con dos empleadores ¿a quién corresponde el pago de la indemnización por fallecimiento y en qué proporción?

**Respuesta del tribunal**

Por remisión al dictamen de la Procuración, Highton, Lorenzetti, Maqueda y Rosatti establecieron que la responsabilidad de abonar íntegramente la indemnización por fallecimiento cabe de manera solidaria a los dos empleadores.

**Argumentos centrales**

El dictamen al que remitió la Corte rechazó por improcedente el agravio relativo a la interpretación sobre el derecho de los hijos mayores de edad a recibir la indemnización prevista en la LCT; consideró que la instancia extraordinaria no tiene por objeto revisar la interpretación y aplicación que hacen los tribunales de normas de derecho común.

Respecto al otro agravio de la actora, el dictamen estimó que la Cámara –al calcular la indemnización por muerte solo sobre la base de los rubros que abonaba el demandado– soslayó que existió un único contrato de trabajo que unió al causante con el demandado y, en forma indirecta, con el Estado Nacional. Omitió también que –según la normativa que estimó aplicable al caso– los rubros aludidos debían ser abonados íntegramente por el empleador; y en caso de pluralidad de empleadores, la responsabilidad será solidaria (arts. 7 de la ley 17.050 y 26, 29, 74, 245, 248 de la LCT), sin perjuicio de las acciones civiles que puedan ejercer entre ellos. Por ello consideró que la sentencia luce contradictoria y carente de fundamentos, al excluir de la liquidación al rubro que abonaba el Estado Nacional.

## **[3] Derecho a la seguridad social: Aseguradoras de Riesgos del Trabajo**

### **Caso N° 10**

#### **“Molina” (2018)**

*La aseguradora no es responsable cuando las omisiones que se le imputan en materia de seguridad e higiene no han sido determinantes para producir ni agravar la afección del trabajador.*

21 Jun 2018

#### **Autos**

“Molina, Pedro Pablo c/ QBE Argentina ART S.A. y otros s/ accidente - acción civil.”. CNT 62766/2013/1/RH1. *Fallos*, 341:688

#### **Hechos y trámite previo**

La aseguradora condenada dedujo recurso extraordinario contra la sentencia que –al revocar el fallo de primera instancia– resolvió que aquélla debía abonar al actor una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados producto de un accidente laboral, en razón de existir un adecuado nexo de causalidad entre los incumplimientos y omisiones en los que habría incurrido la apelante respecto de los deberes de prevención y seguridad y el agravamiento de las lesiones sufridas por el actor, que concluyeron con la amputación de su pie derecho.

#### **Principales antecedentes citados**

- “Basi” (1995): “Basi, Lidia Josefa c/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba s/ demandada”. *Fallos*, 338:823. 08 Sep 2015.
- “López Camelo” (2016): “López Camelo, María Cristina C/ M° J y DDHH- Art 3 Ley 24043 (Resol 979/06) s/ recurso directo”. *Fallos*, 339:824. 14 Jun 2016.
- “Torrillo” (2009): “Torrillo Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina S.A. y otro s/ daños y perjuicios”. *Fallos*, 332:709. 31 Mar 2009.
- “Naval” (2011): “Naval Patricia Elizabeth por sí y en representación de sus hijos menores c/ Odipa S.R.L. y otros s/accidente”. *Fallos*, 334:573. 24 May 2011.

#### **Cuestión**

¿Está adecuadamente establecido el nexo causal entre la conducta de la aseguradora y el agravamiento de la situación del trabajador?

#### **Respuesta del tribunal**

Lorenzetti, Highton y Maqueda respondieron negativamente. Rosatti, en su disidencia, resolvió desestimar el recurso, por limitarse a cuestiones de hecho, prueba, derecho común y procesal, ajenas a esa instancia.

#### **Argumentos centrales**

La mayoría señaló que, pese a ser una cuestión –como regla– ajena a la instancia extraordinaria, existieron en la causa cuestiones centrales que la Cámara omitió considerar:

Por un lado, no reparó en que ninguna prueba demostró el acaecimiento del accidente en el lugar de



trabajo en enero de 2011, como consecuencia del cual habría sufrido un corte plantar que derivó en la amputación de su pie. El voto mayoritario de la Corte agregó que no existió denuncia alguna del siniestro referido. Por otro lado, señaló que el *a quo* tampoco advirtió que el actor fue atendido en un centro médico el 3 de ese mes por una severa infección de larga data en el mismo pie. Finalmente, la mayoría señaló que la Cámara omitió otras cuestiones probatorias importantes, tales como que el demandante presentaba tabaquismo, neuropatía alcohólica, mala higiene corporal y posible condición de diabético. Además, antes de la amputación se le había aconsejado internación médica para el tratamiento de su lesión, a la que no accedió, y prescripto medicación, que el propio actor reconoció no haber tomado. Por todo ello, a juicio de la mayoría, las omisiones imputadas a la aseguradora no son determinantes para producir ni agravar la afección del actor.

La disidencia de Rosatti, por el contrario, destacó que las constancias médicas descartan la existencia de diabetes. Por ello cobra relevancia la falta de provisión de elementos de seguridad, entre otras omisiones. La sentencia cuenta con fundamentos que impiden considerarla arbitraria.

## Caso N° 11

### “Páez Alfonso” (2018)

*La indemnización adicional de pago único –prevista en el art. 3 de la ley 26.773– no se aplica a los accidentes in itinere.*

27 Sep 2018

#### Autos

“Páez Alfonso, Matilde y otro c/ Asociart ART S.A. y otro s/ indemnización por fallecimiento”. CNT 64722/2013/1/RH1. *Fallos*, 341:1268.

#### Hechos y trámite previo

La Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó la sentencia que hizo lugar a la demanda por un accidente *in itinere*. Ordenó a la ART pagar a los padres del empleado la indemnización por fallecimiento según ley 24.557, además del 20% adicional previsto por la ley 26.773 para casos de accidente ocurrido “en el lugar de trabajo” o “mientras [el trabajador] se encuentre a disposición del empleador” (art. 3).

Además, la Cámara declaró de oficio la inconstitucionalidad del decreto 472/2014 que excluía a esta indemnización de la actualización según el RIPTE.

Contra esta sentencia, la ART interpuso un recurso extraordinario que, denegado, dio origen a la queja.

#### Principales antecedentes citados

- “Espósito” (2016): “Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ Accidente- ley especial”. *Fallos*, 339:781. 07 Jun 2016. [*desco16*, caso 17]

#### Cuestión

¿Corresponde actualizar según el RIPTE el monto de la indemnización? ¿Es aplicable el 20% adicional en caso de un accidente *in itinere*?

#### Respuesta del tribunal

Highton, Maqueda y Rosenkrantz coincidieron, remitiendo a “Espósito” (2016), en que el índice

RIPTE no era aplicable; también resolvieron que el incremento del 20% en la indemnización no corresponde en accidentes *in itinere*.

Rosatti disintió: convalidó la declaración de inconstitucionalidad del decreto 472/2014 y consideró aplicable el 20% adicional en el caso.

### **Argumentos centrales**

La mayoría resolvió la primera cuestión por remisión directa a “Espósito” (2016), sin agregar argumentos, aunque aquel fallo no trata central y directamente el contenido del decreto 472/2014. En cuanto al incremento de la indemnización para accidentes *in itinere*, el voto mayoritario subrayó que la letra del art. 3 de la ley 26.773 no incluye ese tipo de accidentes. Explicó que la responsabilidad aumentada de las ART se circunscribe al lugar de trabajo porque allí pueden ejercer un mayor control de las condiciones riesgosas. Agregó que esta interpretación ya puede deducirse de lo resuelto en “Espósito” (2016).

La disidencia, en cambio, juzgó que el decreto cuestionado era inconstitucional, por excluir de la actualización por índice RIPTE a prestaciones que el art. 8 de la ley 26.773 ordena indexar de esa forma. El decreto excede las competencias reglamentarias del Ejecutivo.

Por otra parte, Rosatti consideró que el art. 3 de la ley 26.773 prevé dos supuestos: accidentes producidos en el lugar de trabajo o fuera de él (mientras el empleado “se encuentre a disposición del empleador”). Por lo tanto, la Cámara no incurrió en arbitrariedad al incluir los accidentes *in itinere* dentro del segundo supuesto.

### **Observaciones**

Este fallo es, probablemente, el primero en el que Rosatti discute la cuestión resuelta en “Espósito” (2016). Lorenzetti, pese a haber suscripto oportunamente aquel fallo de 2016, no votó en este caso.

En un fallo posterior, del 30 Oct 2018, “Martínez, Leonardo Matías c/ Galeno Aseguradora de Riesgo de Trabajo S.A. s/accidente- Ley Especial”, CNT 54967/2013/1/RH1 (publicado en *Fallos*, 341:1443), Lorenzetti se unió a Highton y Maqueda para adoptar la misma solución en un caso similar, remitiendo expresamente a “Páez Alfonso” (2018). Rosatti disintió una vez más, con argumentos similares a los vertidos en este caso. Rosenkrantz no emitió voto.

Una mayoría integrada por Rosenkrantz, Lorenzetti, Highton y Maqueda firmó –el mismo día– una decisión similar a la de “Páez Alfonso” (2018) en “Pezzarini, Juan Martín c/ La Caja Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ accidente. Ley especial”, CNT 27907/2013/1/RH1.

## **Caso N° 12**

### **“Palacín” (2018)**

*Para la determinación de la responsabilidad de la ART debe acreditarse la relación de causalidad entre el supuesto incumplimiento de los deberes de prevención que se le atribuye y el daño sufrido por el actor.*

13 Nov 2018

### **Autos**

“Palacín, Fernando Sergio c/ Bruno, Darío Hugo y otro s/ accidente ley especial.”. CNT 5310/2008/1/RH1. *Fallos*, 341:1611.

### **Hechos y trámite previo**

La Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo –revocando parcialmente la sentencia de primera instancia– condenó en forma solidaria al empleador directo y a la ART en los términos del art. 1074 del CC, a reparar integralmente los daños sufridos por el actor en un accidente en ocasión del trabajo, ocurrido por la mala maniobra de un tercero mientras el trabajador conducía el taxi asignado.

La Sala destacó la obligación del empleador de capacitar al trabajador en seguridad y prevención, agregando que las ART deben asesorar a los empleadores a fin de prevenir posibles daños y proteger la salud de los dependientes. La conducta omisiva y negligente de la ART –señaló el tribunal– derivó en daño en la salud del conductor; por lo tanto, no solo responde en los términos de la póliza sino también por aplicación del citado artículo del código entonces vigente.

Contra esa decisión, la ART dedujo recurso extraordinario que fue denegado, lo que dio origen a la queja bajo análisis.

### **Principales antecedentes citados**

- “Rivero” (2002): “Rivero, Mónica Elvira por sí y en representación de sus hijos menores Elisa Sebastián y Elisa Noelia Pamela c/ Techo Técnica S.R.L”. *Fallos*, 325:3265. 03 Dic 2002.

- “Torrillo” (2009): “Torrillo, Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina S.A. y otro”. *Fallos*, 332:709. 31 Mar 2009.

### **Cuestión**

A fin de determinar responsabilidad civil, ¿existe en el caso un nexo causal adecuado entre incumplimientos de la ART y el accidente sufrido por el trabajador?

### **Respuesta del tribunal**

Por remisión al dictamen de la Procuración, el voto de la mayoría conformada por Rosenkrantz, Highton y Maqueda, consideró que al no acreditarse incumplimientos de la ART causalmente conectados con el daño sufrido, la sentencia recurrida es arbitraria; por ello corresponde dejarla sin efecto y remitir los autos al tribunal de origen para el dictado de un nuevo pronunciamiento.

Lorenzetti emitió un voto concurrente remitiendo a los fundamentos vertidos en su disidencia en “Torrillo” (2009).

### **Argumentos centrales**

Citando las decisiones en “Rivero” (2002) y “Torrillo” (2009), el dictamen resaltó que si bien no hay motivos para eximir a las ART del régimen de responsabilidad civil, el nexo causal adecuado entre las omisiones e incumplimientos y el daño es un requisito indispensable para que proceda la acción resarcitoria. La sentencia recurrida no individualizó la inobservancia legal de la ART, sino que se limitó a mencionar genéricamente una supuesta omisión a su deber de asesorar al empleador. Por ello –concluyó el dictamen– debe ser descalificada como acto jurisdiccional sobre la base de la doctrina de la arbitrariedad.

Los argumentos del voto de Lorenzetti –emitidos en su disidencia en “Torrillo” (2009)– se centran en que la opción del trabajador por la vía civil hace aplicables las pautas de la responsabilidad propia de ese ámbito, diferentes de la lógica incluida en el sistema de la LRT. Por lo tanto es necesario demostrar el nexo causal entre la conducta de la aseguradora y el resultado dañoso. Agregó en aquella disidencia (cons. 12) que si bien las aseguradoras no están al margen del régimen de responsabilidad civil, “la mera omisión [de la ART] de los deberes de control y prevención, por sí solos” no bastan para convertirla automáticamente en responsable, prescindiendo de otros factores que hayan tenido vínculo de causalidad.

## Caso N° 13

### “Díaz García” (2018)

*Es arbitraria la sentencia que, luego de anunciar que acataría el criterio de “Espósito” (2016), se apartó de él al fijar la indemnización a partir de principios genéricos tales como la equidad de la reparación.*

04 Dic 2018

### Autos

“Díaz García, Eduardo c/ Swiss Medical ART S.A. s/ accidente - ley especial”. CNT 40344/2012/2/RH2. *Fallos*, 341:1846.

### Hechos y trámite previo

Luego de que la Corte dejara sin efecto una sentencia de la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, se reenvió el expediente para el dictado de una nueva resolución según los criterios planteados por el alto tribunal. Correspondió a la Sala VII de la misma cámara cumplir esa tarea.

Alegando razones de economía procesal y para evitar demoras en la percepción del crédito, la Sala sostuvo que seguiría la doctrina establecida por la CSJN en “Espósito” (2016), pese a no compartirla. Sin embargo, al aplicar la fórmula allí fijada, la Cámara consideró que el resultado no se compadecía con las pautas constitucionales, especialmente las de progresividad y justicia en la reparación. Estableció entonces una indemnización más alta, basada en diversos parámetros del caso (entre ellos, la edad del trabajador afectado, 25 años). Contra este pronunciamiento la demandada interpuso el recurso extraordinario cuya denegación dio lugar a la interposición de la queja, en la que se señaló –entre otros argumentos– que la Sala se había apartado del criterio fijado por la Corte.

### Principales antecedentes citados

- “Espósito” (2016): “Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial”. *Fallos*, 339:781. 07 Jun 2016. [*desco16*, caso 17].

### Cuestión

¿Es arbitraria la sentencia que tras anunciar que seguirá la doctrina de la Corte resuelve el caso aplicando otros criterios?

### Respuesta del tribunal

El voto mayoritario, suscripto por Lorenzetti, Highton, Maqueda y Rosenkrantz, dejó sin efecto la sentencia recurrida, por considerar que se apartaba de los criterios fijados en “Espósito” (2016) y que no encuadraba el caso en la ley aplicable.

Rosatti, en disidencia, consideró que la decisión no era arbitraria, sino que resolvía aspectos no tratados en “Espósito” (2016).

### Argumentos centrales

El voto mayoritario destacó que, al comenzar su argumentación, la Sala señaló que, aunque no suscribía lo resuelto por la CSJN en la causa “Espósito” (2016), acataría las pautas allí establecidas con el fin de evitar un dispendio innecesario jurisdiccional y de tiempo. Luego consideró exigua la indemnización calculada según dichas directivas, a la luz de principios genéricos vinculados con la justicia en la reparación y con el principio de progresividad; prescindió –resaltan los autores del

voto mayoritario— de la ley aplicable, contradiciendo además el propósito postulado inicialmente. En su disidencia, Rosatti señaló que la Sala no se apartó de “Espósito” (2016), sino que —como consecuencia del reenvío— debía dar tratamiento al resto de argumentos y defensas planteadas originalmente, y sobre las que la decisión originariamente recurrida no se había pronunciado. La insuficiencia de la reparación prevista en la ley 24.557 era uno de esos puntos, por lo que —“más allá de su acierto o error”— la sentencia de la Sala VII no es arbitraria.

### **Observaciones**

En “Marando” (2017) [*Fallos*, 340:1259; véase *desco17*, caso 14], la Corte —por mayoría— había revertido, por razones semejantes, otra sentencia similar de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. En aquella oportunidad, el voto en disidencia de Rosatti se limitó a declarar inadmisibile —por aplicación del art. 280 del CPCCN— el recurso interpuesto.

## [4] Derecho al trabajo y a retribución justa

### Caso N° 14

#### “Rica” (2018)

*La relación entre un centro médico y los profesionales que actúan en sus instalaciones no es necesariamente laboral; puede tener carácter civil bajo la figura de locación de servicios.*

24 Abr 2018

#### Autos

“Rica, Carlos Martín c/ Hospital Alemán y otros s/ despido”. CSJ 9/2014 (50-R) / CS1 y otro. *Fallos*, 341:427.

#### Hechos y trámite previo

El actor, neurocirujano que se desempeñaba en el Hospital Alemán, demandó a la institución y a Médicos Asociados Sociedad Civil (MASC) para cobrar indemnización por despido injustificado, además de reclamar imposición de multas por falta de registración de la relación laboral. El médico integraba MASC, entidad encargada de proveer –a través de sus profesionales socios– prestaciones a los afiliados del plan de salud del Hospital Alemán. Por otra parte, el actor también era miembro de la Asociación de Médicos y Profesionales del Hospital Alemán (AMPHA), asociación civil autora de una guía que regulaba la actividad de los profesionales en la institución. En primera y segunda instancia, se hizo lugar a la demanda desestimando la defensa centrada en la naturaleza civil del vínculo con el médico. La condena se extendió solidariamente al presidente de la Comisión Directiva del establecimiento. Las vencidas interpusieron recurso extraordinario cuya denegación dio lugar a la queja.

#### Principales antecedentes citados

- “Amerise” (2000): “Amerise, Antonio Angel c/ Obra Social de la Actividad de Seguros, Reaseguros, Capitalización y Ahorro y Préstamo para la Vivienda”. *Fallos*, 323:2314. 29 Ago 2000.
- “Cairone” (2015): “Cairone, Mirta Griselda y otros c/ Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires Hospital Italiano s/ despido”. *Fallos*, 338:53. 19 Feb 2015.

#### Cuestión

¿Es arbitraria la sentencia que consideró probada la relación laboral principalmente a partir de la pretendida derogación del instituto de la locación de servicios?

#### Respuesta del tribunal

Highton y Rosenkrantz, a quienes Lorenzetti sumó su voto concurrente, consideraron que la sentencia era arbitraria por omitir el tratamiento de elementos relevantes para definir la relación entre el médico y las instituciones. Impusieron costas al actor. Maqueda y Rosatti rechazaron el recurso por aplicación del art. 280 del CPCCN.

#### Argumentos centrales

La Corte destacó que la locación de servicios es una figura vigente de la legislación civil. Además, señaló tres reglas de la guía establecida por AMPHA que el tribunal *a quo* omitió al definir si se trataba de una relación laboral. En primer lugar, dos miembros de la Comisión Directiva de AMPHA deben dar su acuerdo para el nombramiento de profesionales adicionales en un servicio. Además, la guía permite a cada profesional pactar con la jefatura del servicio las pautas para

cumplir su tarea. Por último, el cuerpo médico solo recibe contraprestación por servicios brindados efectivamente. Por lo tanto, el Hospital no tenía facultades exclusivas para organizar al personal o para cambiar las normas de servicio, y no existía una retribución, por lo que el riesgo económico era compartido con los médicos. Todo ello, según la Corte, no permite concluir sin más trámite que existía relación laboral, y por ello la sentencia recurrida es arbitraria. El voto mayoritario agregó otras circunstancias: el médico cobraba como monotributista con facturas no correlativas, de importes diferentes en cada mes; los honorarios eran liquidados solo cuando las obras sociales o las entidades privadas abonaban. Además, en siete años el actor no hizo reclamos laborales. La mayoría destacó que la concurrencia diaria a trabajar en el edificio del Hospital y la ausencia de otros ingresos no alcanzaban para definir la relación como de dependencia laboral.

El voto concurrente de Lorenzetti siguió esas mismas líneas, pero añadió –citando su voto concurrente en “Cairone” (2015)– que la existencia de pautas, indicaciones, verificaciones y controles para cumplir la tarea no basta para comprobar el carácter laboral del vínculo. Destacó también que la ajenidad del riesgo, elemento determinante de la relación de dependencia, no estaba presente en el caso. Agregó que el principio de buena fe contractual impide al médico desconocer el compromiso libremente pactado. Por último, destacó que la sentencia recurrida tenía consecuencias que excedían al caso, por generar “incertidumbre” en “todo el sistema de contrataciones de profesionales”.

### **Observaciones**

“Cairone” (2015) ya había dado un paso en la dirección de este fallo, al rechazar el carácter laboral del vínculo de un anestesista con el Hospital Italiano. Maqueda integró el voto mayoritario de esa decisión junto a Highton; Lorenzetti emitió un voto propio.

## **Caso N° 15**

### **“Correcher Gil” (2018)**

*La actividad de una persona en una asociación civil no necesariamente tiene carácter laboral, sino que puede configurar un voluntariado social.*

24 Abr 2018

### **Autos**

“Correcher Gil, Dolores c/ REMAR Argentina Asociación Civil s/ despido”. CNT 21761/2008/1/RH1. *Fallos*, 341:416.

### **Hechos y trámite previo**

La actora demandó a REMAR exigiendo indemnización por despido, alegando el carácter laboral de la tarea cumplida en la asociación. Tras un resultado adverso en primera instancia, la Sala V de la CNAT hizo lugar a la demanda, basándose en la presunción legal sobre la existencia de un contrato de trabajo y la onerosidad de la labor, sin que REMAR hubiera podido demostrar el carácter benévolo de la actividad desempeñada. Contra esa decisión, la Asociación interpuso recurso extraordinario, que fue concedido.

### **Cuestión**

¿Es arbitraria la sentencia que consideró probada la relación laboral principalmente a partir de las presunciones legales sobre existencia de contrato de trabajo y onerosidad de la tarea?

### **Respuesta del tribunal**

Lorenzetti, Maqueda y Rosenkrantz definieron a la sentencia como arbitraria por no haber considerado los testimonios recabados. Impusieron costas por su orden. Highton y Rosatti disintieron, rechazando el recurso a través del art. 280 del CPCCN.

### **Argumentos centrales**

La Corte destacó los testimonios que desvirtuaban el carácter laboral de la tarea cumplida por la actora. Se hacía referencia al ingreso de la actora a la institución para recuperarse de adicciones, y al carácter gratuito de las labores por tratarse de un voluntariado sin horarios fijos. Otros testimonios precisaban que la vivienda y el automóvil que se facilitaba a la actora no constituían un pago, sino elementos del tratamiento.

Al no considerar estos puntos relevantes para definir el vínculo entre la actora y la Asociación, la sentencia deviene dogmática.

### **Observaciones**

El dictamen de la PGN aconsejaba convalidar la sentencia recurrida, ya que no presentaba signos de arbitrariedad.

## **Caso N° 16**

### **“Ortiz” (2018)**

*Al trabajo en casas particulares se le deben aplicar las escalas salariales fijadas por normas nacionales.*

23 Ago 2018

### **Autos**

“Ortiz, Graciela c/ Serpa de Torres, Nidia y/o Torres, Carlos y/o quien resulte responsable s/ despido”. CSJ 643/2015/RH1. *Fallos*, 341:954.

### **Hechos y trámite previo**

El STJ de Corrientes revocó –haciendo lugar parcialmente al pedido de los demandados– la base salarial tomada en consideración para el cálculo de las diferencias y de los rubros derivados del despido por considerar que las escalas salariales fijadas por el Ministerio de Trabajo de la Nación no rigen para trabajadores de casas particulares de esa provincia, dado que Corrientes no adhirió a la reglamentación nacional. Al no existir una norma local específica, las retribuciones deben determinarse por acuerdo de partes en base a la costumbre imperante en cada localidad.

Contra esta resolución, la actora interpuso recurso extraordinario, que denegado motivó la queja en cuestión. La recurrente sostuvo que la decisión vulneraba los derechos a una retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igualdad legal y debido proceso. Exigió la aplicación de los principios del derecho laboral, por encontrarse en una situación de disparidad de poder de negociación entre las partes, por lo que no cabe invocar el principio *pacta sunt servanda*.

### **Principales antecedentes citados**

- “Pérez” (2009): “Pérez, Aníbal Raúl c/ DISCO SA s/ despido”. *Fallos*, 332:2043. 01 Sep 2009.



### **Cuestión**

¿Es aplicable en una provincia la escala salarial pautaada por el Ministerio de Trabajo de la Nación para el personal que presta servicio en casas particulares?

### **Respuesta del tribunal**

Highton, Lorenzetti, Rosatti y Maqueda resolvieron –por remisión al dictamen de la Procuración– que sí es aplicable.

### **Argumentos centrales**

El dictamen al que remitió la Corte establece que la solución del máximo tribunal correntino no cumplió con el marco legal, ni las garantías constitucionales de retribución justa, salario mínimo y tutela contra el despido arbitrario. Para ello se funda principalmente en el art. 13 del decreto ley 326/1956, que regía el trabajo en casas particulares en el período en juego (2005-2010); en virtud de esa norma, las bases salariales fijadas por el Ministerio de Trabajo de la Nación resultaban aplicables a todo el territorio nacional, salvo en aquellas provincias que legislaran sobre la materia. Asimismo, el dictamen destaca –con citas del voto de los ministros Argibay, Highton y Fayt en “Pérez” (2009)– que el art. 14 *bis* de la CN y el consecuente régimen protectorio en materia laboral es aplicable al trabajo en casas particulares y que la invocación de cuestiones relativas a la organización federal ni vacíos normativos pueden ser alegados para frustrar el efectivo goce de derechos reconocidos por la CN y tratados internacionales, en este caso en cuanto a la garantía del salario mínimo y el derecho a una retribución justa.

### **Observaciones**

Actualmente el art. 18 de la ley 26.844 (régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares), sancionada en 2013, otorga competencia al Ministerio de Trabajo de la Nación para fijar el salario mínimo en esta área, hasta tanto se forme la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.

## **[5] Despido discriminatorio**

### **Caso N° 17**

#### **“Farrell” (2018)**

*Por tratarse de una conducta solapada, es improbable que la discriminación surja de los términos de una notificación rescisoria.*

06 Feb 2018

#### **Autos**

“Farrell, Ricardo Domingo c/ Libertad S.A. s/despido”. CSJ 3194/2015/RH1. *Fallos*, 341:29.

#### **Hechos y trámite previo**

Un empleado jerárquico de Libertad S.A. fue despedido con causa, invocando pérdida de confianza, a los pocos días de participar en una reunión en la que se decidió presentar una nota a la empleadora solicitando aumento salarial. El empleado demandó judicialmente a Libertad S. A. por despido injustificado, reclamando adicionalmente una indemnización civil por el daño moral provocado por la conducta discriminatoria de la empresa. La Cámara del Trabajo tuvo por acreditado que el despido fue la reacción al reclamo salarial por nota; dispuso que se le abonara, además de la indemnización prevista por la LCT, la indemnización por daño moral reclamada. Contra esta decisión Libertad S. A. opuso recurso de casación, al que el TSJ de Córdoba hizo lugar. El máximo tribunal local revocó parcialmente la sentencia dictada por la Cámara. Sostuvo que “no se encontraba justificada la conclusión de que el distracto fue un castigo por reclamar recomposición salarial” pues “la supuesta conducta reprobada no surge del acto mismo del despido ni puede colegirse del contexto fáctico que rodeó la desvinculación”. El actor interpuso recurso extraordinario federal por arbitrariedad de sentencia, cuya denegatoria dio lugar al recurso de queja.

#### **Cuestión**

¿Es necesario que la discriminación surja del acto mismo del despido para tenerla por configurada?

#### **Respuesta del tribunal**

Con las firmas de Highton, Maqueda y Rosatti, la Corte consideró que no es necesario que la razón discriminatoria se manifieste en el acto del despido, especialmente si las razones alegadas por la empleadora no pudieron acreditarse.

#### **Argumentos centrales**

La Corte señaló que la discriminación, por lo común, se caracteriza por constituir una conducta solapada, oculta o encubierta, que no es reconocida por quien la ejecuta y, por lo tanto, es harto improbable que surja de los términos de una notificación rescisoria. De allí que necesariamente deba ser demostrada mediante otras pruebas. La Corte consideró carente de fundamento la conclusión del TSJ cordobés, el que descartó diversos elementos valorados en detalle por la Cámara, para basarse en el texto formal de la comunicación del cese.

#### **Observaciones**

En la misma fecha, en “Bibby, Nicolás c/ Libertad S.A. s/ despido” (CSJ 3195/2015/RH1; *Fallos*, 341:25) el tribunal admitió el recurso de hecho interpuesto por otro empleado despedido por Libertad S.A. tras participar en la misma reunión que Farrell. La Corte –con las firmas de los mismos tres ministros– consideró arbitraria la sentencia del TSJ, debido a que afirmó

dogmáticamente que no estaba justificada la premisa de que el distracto fue un castigo por reclamos salariales, dado que la Cámara había sostenido esa conclusión en función de elementos fácticos.

## **Caso N° 18**

### **“Caliva” (2018)**

*La especial tutela que dispensa el ordenamiento jurídico a la maternidad exige prudencia en la apreciación de las constancias de la causa.*

20 Feb 2018

#### **Autos**

“Caliva, Anabela Soledad c/ Proyection S.A. s/cobro de pesos”. CSJ 000699/2016/RH001. *Fallos*, 341:98.

#### **Hechos y trámite previo**

Caliva, despedida dentro de los siete meses y medio posteriores a la fecha probable de parto fijada por los médicos, demanda a Proyection S. A. por cobro de pesos. En primera instancia el tribunal hace lugar a la demanda y ordena pagar la indemnización prevista en el art. 178 de la LCT. El tribunal de alzada revoca la sentencia por entender que el esquema tutelar de la CN y del derecho internacional de los derechos humanos se torna operativo siempre que el empleador conozca el hecho del embarazo o la maternidad de la trabajadora. En este contexto –agregó el tribunal– resulta un presupuesto necesario la comunicación y acreditación de dicha circunstancia. Tras el rechazo del recurso de inconstitucionalidad local por el TSJ de San Luis, la decisión quedó firme. Contra ella, la actora interpuso recurso extraordinario federal por arbitrariedad de sentencia, cuya denegación dio lugar a la queja.

#### **Principales antecedentes citados**

- “Baqueiro” (1995): “Baqueiro, María Fernanda c/ Banca Nazionale del Lavoro”. *Fallos*, 318:871. 04 May 1995.

#### **Cuestión**

¿Cómo deben apreciarse las constancias de la causa, dada la especial tutela que dispensa el ordenamiento jurídico a la maternidad?

#### **Respuesta del tribunal**

Con las firmas de Highton, Lorenzetti, Maqueda y Rosatti, la Corte sostuvo que es particularmente exigible el ejercicio de la prudencia al apreciar las constancias de la causa al estar en juego la discriminación por maternidad. Por ello consideró que la sentencia recurrida solo en apariencia constituye una derivación razonada del derecho vigente con relación a las circunstancias comprobadas de la causa.

#### **Argumentos centrales**

A los efectos de evaluar el cumplimiento de las exigencias legales respecto de la obligación de notificar y acreditar “en forma” el hecho del nacimiento, el tribunal inferior omitió valorar la prueba documental de la que surge la constancia del 28 Mar 2006 –una semana antes del despido– por el médico que atendió a la trabajadora, en donde se indicó reposo por “cuadro de endometritis puerperal”, lo que no dejaba dudas acerca de que el parto ya se había producido. Lo mismo cabe

decir del telegrama colacionado que la demandante remitió al día siguiente al empleador en el que hizo concreta referencia al “certificado médico de fecha 28/03/06” .

## **Caso N° 19**

### **“Varela” (2018)**

*Quien alega ser víctima de discriminación en el ámbito laboral solo debe demostrar la verosimilitud de la motivación prohibida; la patronal podrá probar que existió una razón cualquiera –no discriminatoria– para el acto impugnado.*

04 Sep 2018

#### **Autos**

“Varela, José Gilberto c/ Disco S.A. s/ amparo sindical”. CSJ 528/2011 (47-V) /CS1. *Fallos*, 341:1106.

#### **Hechos y trámite previo**

El actor –empleado con más de 10 años de antigüedad– reclamó la elección de delegados sindicales en el supermercado donde trabajaba, presentando además notas al gremio y al ministerio de Trabajo. La empresa lo suspendió por impuntualidades; el actor rechazó la sanción por considerarla una represalia contra su actividad gremial. Cuatro días después la empresa lo despidió invocando conducta agravante. El empleado interpuso un amparo solicitando la nulidad del despido en virtud del art. 47 de la ley 23.551.

El fallo en primera instancia fue favorable a la pretensión del actor, cuya actividad sindical se consideró acreditada. Tras la apelación, el tribunal colegiado sostuvo que la reinstalación solo se aplicaba a representantes gremiales, y no a activistas como el actor. La decisión fue confirmada por la Corte de Justicia de Catamarca. Denegado el recurso extraordinario, el empleado recurrió en queja ante la CSJN.

#### **Principales antecedentes citados**

- “Pellicori” (2011): “Pellicori, Liliana Silvia c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal s/ amparo”. *Fallos*, 334:1387. 15 Nov 2011.

- “Sisnero” (2014): “Sisnero, Mirtha Graciela c/ Taldelva SRL y otros s/ amparo”. *Fallos*, 337:611. 20 May 2014.

#### **Cuestión**

¿Es arbitraria la sentencia recurrida?

#### **Respuesta del tribunal**

Highton, Maqueda y Rosenkrantz juzgaron arbitraria la sentencia, por no haber considerado elementos relevantes –según “Pellicori” (2011) y “Sisnero” (2014)– para determinar el carácter discriminatorio del despido. Rosatti emitió un voto concurrente.

#### **Argumentos centrales**

El voto de Highton, Maqueda y Rosenkrantz retomó el criterio de prueba para la discriminación en

el ámbito laboral fijado en “Pellicori” (2011) y “Sisnero” (2014): debido a la dificultad para obtener prueba fehaciente, basta con acreditar “de modo verosímil” que existió un motivo discriminatorio; en este caso, la actividad sindical. Precisó luego que el actor debe probar que esa actividad está incluida en la ley 23.551 y es ejercida “de modo regular”; o bien debe demostrar que constituye una “opinión gremial” en los términos de la ley 23.592 (o Ley Antidiscriminatoria). Allí corresponderá entonces a la patronal demostrar que el despido obedeció a “cualquier otro motivo, de la naturaleza que fuere”, mientras no tenga carácter discriminatorio (cons. 9).

Entrando al caso particular, el voto mayoritario señaló que la Corte catamarqueña no consideró elementos relevantes para la verosimilitud del planteo hecho por el empleado, tales como la presentación –acogida favorablemente– ante el Ministerio de Trabajo solicitando elección de delegados y los testimonios de sus compañeros. Por otra parte, el tribunal provincial tampoco evaluó si la empresa cumplió la carga probatoria que le correspondía, ni tuvo en cuenta que la primera reacción patronal fue el despido. Con estos elementos, Highton, Maqueda y Rosenkrantz indicaron que la sentencia recurrida era arbitraria; aclararon que ello no implicaba una decisión sobre el fondo del asunto.

En su voto concurrente, Rosatti centró su análisis en la ley 23.592 entendida como norma reglamentaria general del derecho a la igualdad y la no discriminación, consagrado en los arts. 16, 14 *bis*, 37, 43, 75 incs. 19 y 23 de la CN, y en cláusulas de tratados de igual jerarquía. Ante el acto discriminatorio, es opción del afectado recurrir a la reparación económica o a la restitución al estado anterior. Sobre el caso, Rosatti precisó que no es necesario ejercer una función sindical, ya que la ley 23.592 tutela la “opinión gremial”. Subrayó que las libertades de opinión, expresión y reunión son “patrimonio de todo trabajador, sindicado o no, con pretensiones de representatividad o no”, definiendo –por remisión a antecedentes de la Corte– al trabajador como “sujeto de preferente tutela constitucional” (cons. 13). El voto agregó como fundamentos disposiciones de la OIT y la OG 20 (2009) del Comité DESC, entre otros materiales. En el considerando final, Rosatti destacó que su decisión “no importa desconocer [...] la libertad de contratación del empleador, **constitucionalmente reconocida, de la que deriva la posibilidad de despedir**” (énfasis en el original); no se consagra una estabilidad absoluta, sino que se refuerza la prohibición de discriminar.

### Observaciones

El dictamen de la Procuración General también consideraba arbitraria la sentencia recurrida, por no haber aplicado debidamente la ley 23.592.

Cabe señalar que –a diferencia de este fallo– en “Pellicori” (2011) la Corte estableció que para demostrar que el despido no tenía carácter discriminatorio, la patronal debía demostrar que existía un “motivo objetivo y razonable”.

## [6] Garantías gremiales

### Caso N° 20

#### “UNR” (2018)

*La ley 23.551 no autoriza a los jueces a disponer un levantamiento genérico de la tutela sindical.*  
15 Feb 2018

#### Autos

“Universidad Nacional de Rosario c/ Calarota, Luis Raúl s/ exclusión de tutela sindical”. CSJ 13/2012 (48-U)/CS1. *Fallos*, 341:84.

#### Hechos y trámite previo

La UNR promovió acción sumarísima de exclusión de tutela sindical contra un profesor que se desempeñaba como representante gremial, estando –al mismo tiempo– sometido a un régimen periódico de evaluación dentro del marco de la carrera docente. Conforme a este régimen el docente permanece en el cargo en tanto evidencie un desempeño satisfactorio: Pierde la estabilidad y titularidad si obtiene dos evaluaciones negativas consecutivas por parte de la Comisión de la Carrera Docente, supuesto en el que quedó comprendido el trabajador.

En primera instancia el tribunal hizo lugar a la acción, decisión confirmada por el tribunal de alzada, al entender que el resultado de las evaluaciones no fue arbitrario ni afectado por discriminación o persecución respecto de la actividad gremial del docente. Consideró además el tribunal que no surgía de los testimonios ninguna medida tendiente a impedir o dificultar esa actividad. Contra esta decisión el actor interpuso recurso extraordinario federal por arbitrariedad de sentencia; ante la denegatoria, se presentó en queja ante la Corte.

#### Principales antecedentes citados

- “Ríos” (1987): “Ríos, Antonio Jesús s/ oficialización candidatura Diputado Nacional – Distrito Corrientes”. *Fallos*, 310:819. 22 Abr 1987.
- “B.A.” (2001): “B., A. s/ autorización judicial”. *Fallos*, 324:4061. 07 Dic 2001.
- “F.A.L.” (2012): “F. A. L. s/Medida autosatisfactiva”. *Fallo*, 335:197. 13 Mar 2012.
- “Vallejo” (1992): “Vallejo, Gustavo César y otro s/ infracción ley 19.359”. *Fallos*, 315:1574. 07 Abr 1992.
- “Diario La Nación” (1993): “Editor Responsable y/o Director del Diario La Nación s/ art. 110 del C.P.” *Fallos*, 316:1141. 08 Jun 1993.
- “Alfonsín Collazo” (2001): “Alfonsín Collazo, Jesús Manuel c/ Coptelezza, Juan Máximo y otro”. *Fallos*, 324:2542. 28 Ago 2001.
- “Club Ferrocarril Oeste” (2014): “Club Ferrocarril Oeste Asociación Civil c/ s/quiebra s/ incidente de apelación (designación de integrante de órgano fiduciario)”. *Fallos*, 337:149. 06 Mar 2014.

#### Cuestión

De acuerdo a las normas legales en juego, ¿pueden los jueces disponer un levantamiento genérico de la tutela posibilitando la adopción de cualquier medida que afecte la estabilidad del trabajador?

#### Respuesta del tribunal

Por mayoría la CSJN resolvió que la interpretación que efectuó el tribunal *a quo* acerca de los requisitos y alcances de la acción de levantamiento de la tutela sindical no se compadece con los

textos normativos en juego, ni con el fin que persiguió el legislador al dictarlos, que no es otro que preservar a los representantes sindicales de cualquier represalia patronal explícita o encubierta, exigiéndole al empleador la previa demostración judicial de causa justificada para adoptar medidas que modifiquen, suspendan o extingan la relación laboral.

### **Argumentos centrales**

El voto de mayoría –suscripto por los ministros Lorenzetti, Highton y Maqueda– invocó las garantías del art. 14 *bis* de la CN para los representantes gremiales; lo reglado por el art. 1 del Convenio 135 de la OIT (aprobado por Argentina mediante ley 25.801); la Recomendación 143 de la OIT del año 1971 (que complementa dicho Convenio) y los principios sentados por el Comité de Libertad Sindical de la OIT.

Sostuvo el voto mayoritario que, con el fin de implementar las garantías relacionadas con la estabilidad de los representantes sindicales, el art. 48 de la ley 23.551 dispone que “no podrán ser suspendidos, modificadas sus condiciones de trabajo, ni despedidos durante el tiempo que dure el ejercicio de sus mandatos y hasta un año más, salvo que mediare justa causa”. El art. 52 refuerza la tutela legal estableciendo que “los trabajadores amparados [...] no podrán ser suspendidos, despedidos ni con relación a ellos podrán modificarse las condiciones de trabajo, si no mediare resolución judicial previa que los excluya de la garantía”. En este marco, si la garantía consiste –precisamente– en que no caben tales medidas “salvo que mediare justa causa”, la resolución judicial previa a la que alude el art. 52 solo puede excluir dicha garantía a partir de una cabal comprobación del motivo justificado. Esta comprobación –afirmó– solamente puede hacerse a partir de una concreta especificación en la demanda de la medida que se pretende adoptar, pues de otro modo los jueces no podrían evaluar si las razones que se alegan guardan relación o proporción adecuada con el despido, la suspensión o la modificación contractual de que se trate.

El ministro Rosatti, en voto concurrente, indicó que la sentencia presenta defectos de fundamentación, por no haber dado respuesta a los planteos sobre la procedencia de la acción prevista en el art. 52 de la ley 23.551; la decisión –señaló Rosatti– descartó dogmáticamente la fuerza probatoria de diversos elementos de juicio presentes en la causa.

El ministro Rosenkrantz, en disidencia, desestimó la queja.

### **Observaciones**

Al momento en que la Corte se pronunció, ya habían expirado hacía tiempo los mandatos gremiales del demandando. Sin embargo, el voto mayoritario no consideró ello un obstáculo. Al contrario, señaló –tal como hizo en “DEPC” (2018)– que, dado el carácter transitorio de dichos mandatos, resultaría difícil que estas cuestiones llegaran a conocimiento del tribunal sin haberse vuelto abstractas. Por ello concluyó que debía admitirse el remedio federal para no frustrar el rol de la Corte como garante supremo de los derechos humanos en esta clase de casos.

## Caso N° 21

### “DEPC” (2018)

*Es arbitraria la sentencia que omitió el tratamiento de la prescripción de la potestad sancionadora del empleador y el análisis de la falta de contemporaneidad en la sanción como indicio de conducta antisindical.*

21 Nov 2018

#### **Autos**

“Dirección Provincial de Energía de Corrientes (D.P.E.C.) c/ Aquino, Celedonio Orlando s/ exclusión de tutela sindical”. CSJ 390/2016/RH1. *Fallos*, 341:1621.

#### **Hechos y trámite previo**

El STJ de Corrientes desestimó el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto y confirmó el pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral, que había admitido la acción de exclusión de tutela sindical promovida por la Dirección Provincial de Energía contra el trabajador demandado (“delegado gremial” de la seccional local del Sindicato de Luz y Fuerza).

El demandado interpuso a su turno recurso extraordinario, cuya denegación originó la queja. Destacó que el proceso de exclusión fue promovido una década después de los hechos, cuando la facultad sancionadora del empleador se hallaba prescripta, según el estatuto local del empleado público. Esa distancia temporal, según el demandado, afectó su derecho a ser juzgado en un plazo razonable y mostró la “conducta antisindical” de la otra parte.

#### **Cuestión**

¿Resulta ajustada a derecho la sentencia que omitió pronunciarse sobre la prescripción de la potestad sancionadora invocada por el demandado y la posible conducta antisindical de la empleadora?

#### **Respuesta del tribunal**

Highton, Lorenzetti y Maqueda, en el voto mayoritario, consideraron que la sentencia recurrida era arbitraria, por lo que dispusieron que los autos volvieran al tribunal de origen a fin de que se dictara un nuevo pronunciamiento.

Rosenkrantz y Rosatti suscribieron un voto concurrente conjunto.

#### **Argumentos centrales**

La mayoría entendió que el recurso era procedente, ya que –pese a tratarse de cuestiones en principio ajenas a la instancia extraordinaria– el STJ había omitido tratar una defensa debidamente introducida y conducente para la resolución del caso. No consideró un obstáculo para admitir el recurso la eventual expiración del mandato gremial del demandado. Señaló –tal como en “UNR” (2018)– que, dado el carácter transitorio de ese mandato, resultaría dificultoso para la Corte tratar cuestiones como las planteadas en el caso sin riesgo de tornarse abstractas. Por ello debe habilitarse la instancia, a fin de que no se frustre el rol de la Corte como garante supremo de los derechos constitucionales en juego.

En concreto, destacó que el STJ eludió analizar la alegada prescripción de la potestad sancionadora del empleador, pese a que dilucidar ese punto resultaba necesario para juzgar la existencia de justa causa para la exclusión de tutela sindical. No era posible diferir la cuestión a un eventual pleito posterior, especialmente cuando la consecuencia de la decisión del STJ fue habilitar a la empleadora



a aplicar la sanción de cesantía. Por ello la sentencia recurrida no constituye un acto judicial válido y corresponde que sea dejado sin efecto en virtud de su arbitrariedad.

El voto concurrente de Rosenkrantz y Rosatti compartieron los argumentos de la mayoría pero mencionaron explícitamente que el STJ omitió tratar la distancia temporal entre los hechos que habrían motivado el pedido de exclusión de tutela y el momento en que efectivamente se planteó. Ese elemento podría indicar una conducta antisindical, que necesariamente debe considerarse antes de dar curso a la exclusión solicitada.

## **[7] Derechos del personal de Fuerzas Armadas y de Seguridad**

### **Caso N° 22**

#### **“Gasparutti” (2018)**

*No corresponde al Estado nacional pagar viáticos ni gastos al personal que cumple funciones en el extranjero dentro de operaciones de paz de la ONU.*

03 May 2018

#### **Autos**

“Gasparutti, Diego c/ EN – M° Defensa – M° RECI y C-GN s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.”. CAF 3351/2006/CA3-CS1. *Fallos*, 341:461.

#### **Hechos y trámite previo**

La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el rechazo de la demanda interpuesta por un gendarme con el objetivo de cobrar viáticos y gastos generados por su participación en operaciones de paz de la ONU en Bosnia y Herzegovina. El actor presentó un recurso extraordinario, que fue concedido.

#### **Principales antecedentes citados**

- “Mara” (2011): “Mara, Hugo Jorge c/ EN – M° Defensa – SSI- GN – resol. 1219/96 y 1307/97 SS s/ personal Militar y Civil de las FAA y de Seg.”. *Fallos*, 334:983. 06 Sep 2011.

#### **Cuestión**

¿Tiene derecho a viáticos y gastos el personal que cumple funciones en el extranjero dentro de operaciones de paz de la ONU?

#### **Respuesta del tribunal**

Highton, Lorenzetti y Maqueda –por remisión a “Mara” (2011)– sostuvieron que no corresponde al Estado nacional pagar viáticos ni gastos, confirmando la sentencia recurrida e imponiendo costas al actor. En su disidencia, Rosatti consideró que sí corresponde. En tanto, la disidencia de Rosenkrantz no se pronunció sobre la solución de fondo, pero sí revirtió la decisión recurrida porque el tribunal inferior omitió considerar elementos importantes que distinguen este caso de lo resuelto en “Mara” (2011).

#### **Argumentos centrales**

Mediante la remisión a “Mara” (2011), el voto mayoritario la Corte señaló que las resoluciones que autorizaron al actor a cumplir servicios en el exterior fijaban claramente que la única retribución sería la que abone la ONU, encuadrando la situación en el decreto 280/95, que regula los viajes al exterior del personal de la Administración Pública Nacional. En virtud de estas resoluciones, consentidas por el actor, no hay derecho a reclamar al Estado argentino otras remuneraciones.

La disidencia de Rosatti enfatizó que el art. 2 del decreto 280/95 excluye específicamente al personal militar que se halle en misión transitoria en cuerpos de la ONU. Añadió que no es posible –como pretendió el Estado argentino– derogar para el caso específico esa excepción mediante las resoluciones dictadas para el traslado del actor: el principio de juridicidad, sostuvo Rosatti, implica la “inderogabilidad singular” de las normas generales. También descartó que el consentimiento del actor pudiera eximir del pago, ya que el gendarme se vio obligado a aceptar para poder ejercer su

actividad. Por último, agregó que la ONU ha informado que la selección y remuneración del personal incorporado a sus misiones está a cargo de los Estados parte. Rosenkrantz destacó las diferencias fácticas y procesales que impiden la aplicación directa de “Mara” (2011) a este caso; en particular, que el actor no disputó la normativa aplicable al caso, sino que señaló su incumplimiento.

## **Caso N° 23**

### **“Gómez, Félix” (2018)**

*Dadas las amplias facultades del Jefe del EMGE para modificar las alícuotas destinadas a sostener la obra social del Ejército, es legítimo el descuento fijado sobre el SAC del personal retirado.*

07 Ago 2018

#### **Autos**

“Gómez, Félix Rubén y otros c/ M° de Defensa -Instituto Obra Social del Ejército y otro s/Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.”. CSJ 1063/2013 (49-G) /CS1. *Fallos*, 341:878.

#### **Hechos y trámite previo**

La causa es iniciada por personal del ejército retirado y/o pensionado, afiliados al IOSE. Solicitaron al Ministerio de Defensa y a la referida entidad que se reduzca de 6 a 3% el descuento mensual en concepto de afiliación, y que se restituya el monto descontado sobre el SAC.

La Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social rechazó la primera pretensión invocando el precedente “Molina” (*Fallos*, 335:146), según el cual el Jefe del EMGE puede aumentar o disminuir el valor de la cuota de afiliación de la obra social.

En relación al descuento sobre el SAC, la Cámara –aplicando el decreto 537/92– resolvió excluir al SAC de la base del cálculo de la cuota y ordenó a la demandada a devolver las sumas descontadas sobre ese rubro. Contra esa resolución, la demandada interpuso recurso extraordinario federal que, denegado, dio origen a la queja.

#### **Principales antecedentes citados**

“Brondino” (2013): “Brondino, Juan E. y otros c/ Estado Nacional s/ ordinario”. *Fallos*, 336:355. 09 Abr 2013.

#### **Cuestión**

¿Es procedente que la obra social del Ejército realice descuentos de afiliación sobre el SAC de personal retirado?

#### **Respuesta del tribunal**

Lorenzetti, Rosatti y Maqueda consideraron que es legítimo el descuento sobre el SAC. Rosenkrantz llegó a la misma conclusión en un voto propio.

#### **Argumentos centrales**

Lorenzetti, Rosatti y Maqueda resolvieron que el Jefe del EMGE tiene amplias facultades para establecer las erogaciones necesarias para el funcionamiento del IOSE, de acuerdo a las líneas argumentales fijadas en “Brondino” (2013), donde la Corte sostuvo que el principio de solidaridad

permitía exigir contribuciones a los afiliados, y que la situación de emergencia era la base para decidir aportes extraordinarios.

En su voto concurrente, Rosenkrantz destacó que –a diferencia del salario familiar y otros ítems específicos– el SAC no está excluido expresamente de los rubros susceptibles del descuento para contribuir al IOSE. Además, señala que el Poder Ejecutivo tiene –en virtud del art. 99 inc. 2 de la CN– la facultad de aprobar el reglamento de afiliación del instituto, que –a su turno– autoriza al Jefe del EMGE a fijar los aportes exigibles al personal.

### **Observaciones**

Si bien en Brondino (2013) se afirmó la facultad del Poder Ejecutivo para autorizar al Jefe del EMGE a fijar las contribuciones necesarias para el equilibrio financiero del IOSE, el argumento central giró en torno a la justicia contributiva y a la justicia social entre aportantes, que en tiempos de crisis (como en la época de la normativa cuestionada ) requieren un sacrificio patrimonial de ese colectivo. Cabe señalar que “Brondino” (2013) no hizo alusión a la diferencia de personal en actividad y jubilado. Además, en la única oportunidad en que mencionó el SAC, lo hizo para mostrar la intención del Poder Ejecutivo de morigerar el impacto de las contribuciones sobre el salario, a través de una resolución de la Jefatura que hacía cesar el descuento de la cuota de afiliación sobre el SAC, sin aclarar distinciones.

En ese mismo fallo, la Corte –tras reconocer las atribuciones del Ejecutivo en la materia– resolvió poner en conocimiento del Presidente sus consideraciones sobre la progresiva mejora de la situación, que podría justificar la reducción de los aportes basados en la emergencia.

## **Caso N° 24**

### **“Segura” (2018)**

*Un monto abonado de modo general y sin límites temporales tiene carácter remunerativo; será, además, bonificable según la intención del legislador.*

04 Sep 2018

### **Autos**

“Segura, María Elena c/ EN -M Defensa- Armada – dto. 1336/05 435/09 s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.”. CAF 32243/2011/CS1. *Fallos*, 341:1097.

### **Hechos y trámite previo**

Revocando la decisión de primera instancia, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a la demanda de la actora, declarando el carácter remunerativo y bonificable del suplemento regido por los decretos 1336/05 y 435/09, por tratarse de una cifra abonada a todo el personal adscripto al régimen de personal de investigación y desarrollo de las FFAA. La Armada interpuso recurso extraordinario, que fue concedido.

### **Principales antecedentes citados**

- “Pérez” (2009): “Pérez, Aníbal Raúl c/ Disco S.A. s/ despido”. *Fallos*, 332:2043. 01 Sep 2009.
- “González” (2010): “González, Martín Nicolás c/ Polimat SA y otro s/ despido”. *Fallos*, 333:699. 19 May 2010.

### **Cuestión**

¿Es remunerativo y bonificable el suplemento abonado en virtud de los decretos 1336/05 y 435/09 al personal de investigación y desarrollo de las FFAA?

### **Respuesta del tribunal**

Lorenzetti, Maqueda y Rosatti, por remisión al dictamen de la Procuración, confirmaron que el suplemento es remunerativo y bonificable. El voto concurrente de Highton y Rosenkrantz también remitió al dictamen, aunque excluyendo dos párrafos.

### **Argumentos centrales**

Según el dictamen al que remitió el voto de Lorenzetti, Maqueda y Rosatti, el pago se realiza de modo general y sin límites temporales; ello le da carácter remunerativo. También se valoró el objetivo de lograr una “justa equiparación salarial”, consignado en los considerandos de los decretos. Luego, el dictamen señaló que la intención del legislador define si se trata de un pago bonificable: para ello, a partir del articulado de los decretos, concluyó que el monto regido por ellos se debía considerar para calcular las compensaciones por actividad riesgosa y por título, pero no para la compensación por antigüedad.

El voto concurrente de Highton y Rosenkrantz excluyó dos párrafos del dictamen: en ellos, retomando lo resuelto en “Pérez” (2009) y en “González” (2010), se reiteraba que –más allá del nombre que la legislación fije– deben considerarse remunerativos aquellos montos que no puedan diferenciarse de un aumento de salarios. En “Pérez” (2009) esa pauta se aplicó a los “vales alimentarios”; en “González” (2010), a las denominadas “asignaciones mensuales no remunerativas de carácter alimentario” previstas en distintos convenios colectivos.

## **Caso N° 25**

### **“Jaques” (2018)**

*El beneficio del doble ascenso al momento del pase a retiro previsto en la ley 20.774 solo procede si el hecho causante de la incapacidad resulta directa e inmediatamente del ejercicio de funciones penitenciarias y en virtud del riesgo propio de ellas.*

30 Oct 2018

### **Autos**

“Jaques, Emilio César c/ Estado Nacional (Ministerio de Justicia) s/ Personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”. CSJ 120/2010 (46-J)/CS1. *Fallos*, 341:1423.

### **Hechos y trámite previo**

La Sala I de la Cámara Federal de la Seguridad Social confirmó la decisión de la instancia anterior que había rechazado la demanda interpuesta contra el Estado Nacional por un suboficial retirado del Servicio Penitenciario Federal, con el objeto de que se declarara la nulidad del acto administrativo

que desestimó su reclamo de que se le concediera, por la incapacidad sufrida, los beneficios previsionales especiales previstos en las leyes 16.443 y 20.774 y se le abonaran las diferencias salariales correspondientes. La Sala expresó que el art. 1 de la ley 20.774 condiciona el doble ascenso al momento del retiro a que la minusvalía haya resultado directa e inmediatamente de funciones penitenciarias y como riesgo específico y exclusivo de la profesión. Al considerar que tales circunstancias no se daban en el caso, confirmó la denegatoria. El actor interpuso recurso extraordinario federal que, denegado, dio lugar a la interposición de la queja.

### **Principales antecedentes citados**

- “Rojas” (2008): “Rojas, Rodolfo c/ Estado Nacional - Ministerio de Justicia”. R. 2. XLII. 16 Sep 2008.
- “Galera” (2008): “Galera, Cirila c/ Estado Nacional - Ministerio de Justicia de la Nación”. G. 715. XLII. 16 Sep 2008.
- “Del Valle Yñíguez” (1993): “Del Valle Yñíguez, Hortencia c/ La Nación – Policía Federal Argentina s/ regularización”. *Fallos*, 316:679. 10 Abr 1993.

### **Cuestión**

¿Es correcta la interpretación practicada por el tribunal *a quo* de la normativa aplicable al caso y del encuadramiento de la discapacidad sufrida por el actor?

### **Respuesta del tribunal**

Remitiéndose al dictamen de la Procuración General, Highton, Lorenzetti y Maqueda se pronunciaron por la procedencia del recurso, por encontrarse en juego la interpretación de normas federales. Afirmaron que el tribunal *a quo* había interpretado correctamente la normativa aplicable, por lo que corresponde confirmar la sentencia recurrida.

Rosenkrantz, en disidencia, se pronunció por hacer lugar al recurso extraordinario y revocar la decisión impugnada.

### **Argumentos centrales**

La mayoría –por remisión al dictamen de la Procuración– sostuvo que, el beneficio del doble ascenso al momento del pase a retiro (previsto por la ley 20.774) se subordina a que la incapacidad sea la consecuencia directa e inmediata del ejercicio de funciones específicas y se haya producido en virtud del riesgo propio de esas funciones. En el caso la lesión ocurrió cuando el actor procuró frenar un intento de robo del que él mismo fue víctima, fuera de la jurisdicción penitenciaria. El voto mayoritario entendió que no se trataba de una instancia de ejercicio de la función penitenciaria, ya las obligaciones derivadas de ese estado no se equiparan a las del estado policial. Los agentes penitenciarios no tienen la carga de cumplir –fuera de la jurisdicción penitenciaria– deberes propios de las fuerzas de seguridad.

Rosenkrantz, en disidencia, precisó que era necesario determinar si las lesiones sufridas debían calificarse como “en y por actos de servicio” específicos de la función penitenciaria, a fin de otorgar el beneficio de la ley 20.774. La disidencia examinó los deberes esenciales que la ley 20.416 le impone al personal penitenciario. Observó que entre ellos se encuentra la obligación de “defender contra las vías de hecho o en actos de arrojo [...] la propiedad, la libertad y la vida de las personas”

y “prevenir y reprimir toda acción delictiva”. Este deber no se limita a la jurisdicción penitenciaria, sino que comprende también actividades fuera de ella en cooperación con otras fuerzas. Según este marco –concluyó el ministro disidente– el accidente sufrido mientras intentaba evitar la comisión de un ilícito penal fuera de la jurisdicción penitenciaria resultó del ejercicio de un deber esencial impuesto por la ley 20.416: por lo tanto constituye un riesgo propio y específico de la función penitenciaria.

## **Caso N° 26**

### **“Yurrita” (2018)**

*El concepto de “accidentes en y por acto del servicio” policial incluye los sufridos en actividades que no hubieran podido producirse fuera de ese servicio, incluyendo tareas de aseguramiento de prueba y cooperación con el poder judicial.*

30 Oct 2018

#### **Autos**

“Yurrita, Jorge Alberto c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior – Policía Federal Argentina s/ Personal Militar y Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad”. CSJ 48/2013 (49-Y) /CS1. *Fallos*, 341:1460.

#### **Hechos y trámite previo**

El actor –suboficial retirado con el grado de sargento de la Policía Federal Argentina– interpuso demanda para obtener la recalificación de los hechos que derivaron en la minusvalía que motivó su pase a retiro obligatorio. Solicitó encuadrarlos en el art. 98 inc. a de la ley 21.965, que fija un haber de retiro equivalente al total de la remuneración del grado inmediato superior para agentes accidentados “en y por acto del servicio”.

Haciendo lugar a la demanda, el juez de primera instancia señaló que al momento del accidente el actor estaba a cargo de una grúa y, al proceder a enganchar a un vehículo afectado a una causa judicial en depósito, se produjo la rotura del mecanismo que accionaba la pluma del móvil policial; su mano derecha quedó aprisionada y ello lo dejó totalmente incapacitado. Tras la apelación de la demandada, la Sala I de la Cámara Federal de la Seguridad Social revocó el fallo. Para encuadrar el accidente tal como pedía el suboficial, debía resultar de modo directo e inmediato del ejercicio de las funciones policiales definidas en los arts. 3 y 4 del decreto-ley 333/58. Denegado el recurso extraordinario interpuesto contra esta decisión, el actor se presentó en queja ante la Corte Suprema.

#### **Principales antecedentes citados**

- “Macri” (1944): “Macri, Nicolás c/ Nación Argentina”. *Fallos*, 200:165. 03 Nov 1944.

- “Lodi” (1992): “Lodi, Alberto Atilio c/ Estado Nacional (Ministerio de Defensa - Estado Mayor General del Ejército)”. *Fallos*, 315:1256. 10 Jun 1992.
- “Alfonso de Duarte” (2003): “Alfonso de Duarte, Gloria Mirta c/ Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación – Mendoza”. *Fallos*, 326:2390. 15 Jul 2003.
- “Gravano” (1972): “Gravano, Juan Santiago c/ Nación”. *Fallos*, 283:98. 05 Jul 1972.
- “Coquibus” (1975): “Coquibus, Ricardo E. c/ Nación”. *Fallos*, 292:522. 16 Sep 1975.
- “Del Valle Yñíguez” (1993): “Del Valle Yñíguez, Hortencia c/ La Nación – Policía Federal Argentina s/ regularización”. *Fallos*, 316:679. 10 Abr 1993.

## Cuestión

¿Es correcta la interpretación del tribunal *a quo* en tanto restringe el alcance de las funciones policiales a las enunciadas en los arts. 3 y 4 del decreto-ley 333/58?

## Respuesta del tribunal

Los ministros Highton, Lorenzetti, Maqueda y Rosatti entendieron que la interpretación era incorrecta, por lo que correspondía revocar la sentencia y confirmar la de primera instancia.

Rosenkrantz, en disidencia, confirmó la sentencia apelada, entendiendo que el accidente en cuestión no podía calificarse como ocurrido “en y por actos de servicio” a los fines previsionales.

## Argumentos centrales

Para el voto mayoritario, la determinación del alcance del beneficio establecido por el art. 98 inc. a de la ley 21.965 exigía revisar su reglamentación. Señalaron que el art. 696 inc. a del decreto 1866/83 dispone que las contingencias de invalidez o muerte se considerarán como producidas “en y por acto del servicio” cuando sean “la consecuencia directa o inmediata del ejercicio de la función policial, como un riesgo específico y exclusivo de la misma, [...] esto es, que no hubieran podido producirse en otras circunstancias de la vida ciudadana”. Recordaron la doctrina según la cual las normas deben interpretarse según el sentido propio de las palabras, considerando que los términos no son superfluos sino utilizados con algún propósito. Finalmente concluyeron que en el caso se encuentra cumplida la condición: la contingencia ocurrió por la falla en el mecanismo de la grúa que el actor operaba en la División Sustracción de Automotores de la Policía Federal Argentina como suboficial de esa fuerza. El accidente no hubiera podido producirse fuera de dicho servicio que, además, se encuentra comprendido dentro de las funciones generales de aseguramiento de pruebas de delitos y cooperación con la justicia que impone el estado policial, enunciadas en los incs. 2 y 6 del art. 3 del decreto-ley 333/58.

Rosenkrantz, en cambio, llevó adelante su interpretación examinando la disposición reglamentaria citada junto con el resto del texto de la ley 21.965. En este marco, sostuvo que el art. 696 inc. a limita la noción de “en y por acto del servicio” al ejercicio de funciones que constituyen un riesgo específico y exclusivo de la labor policial. Para el ministro disidente, a los fines de distinguir las actividades ocurridas “en y por acto de servicio” de aquellas que no lo son, tiene relevancia el art. 8 inc. d de la ley 21.965, según el cual el estado policial supone, entre otros deberes, “defender contra las vías de hecho, la vida, la libertad y la propiedad de las personas aun a riesgo de su vida o integridad personal”. A partir de ello, Rosenkrantz afirmó que los accidentes y enfermedades



ocurridos “en y por acto de servicio” son los sufridos por agentes de la Policía Federal al desarrollar actividades orientadas a ese objetivo. Por ello, concluyó, las tareas de “servicio de grúa” no pueden considerarse como resultado de un riesgo exclusivo y específico de la función policial.

## **Caso N° 27**

### **“Barrera” (2018)**

*Las remuneraciones del personal de la PSA están reguladas por un régimen específico, por lo que no resulta aplicable el decreto 1305/12.*

30 Oct 2018

### **Autos**

“Barrera, Oscar Edmundo c/ Estado Nacional. Ministerio de Seguridad - PSA – Decreto 1590/06 861107 s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seguridad.” CAF 36359/2012/CS2-CS1. [No publicado en *Fallos*]

### **Hechos y trámite previo**

El actor promueve demanda contra el Estado Nacional solicitando que se incorporen al haber mensual como “remunerativos y bonificables” las sumas otorgadas como adicionales transitorios por los decretos 1590/06, 861/07, 884/08 y 752/09. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia de primera instancia favorable al actor. Tomando en cuenta lo resuelto en casos similares, la Cámara determinó que los adicionales transitorios debían liquidarse según el criterio de primera instancia hasta el 31 Jul 201 inclusive, fecha en que entró en vigencia el decreto 1305/12. La demandada interpuso recurso extraordinario federal por arbitrariedad y gravedad institucional, rechazando la fecha fijada por la Cámara por entender que el citado decreto de 2012 no es aplicable a la PSA.

### **Cuestión**

¿Resulta aplicable a la PSA el decreto 1305/12?

### **Respuesta del tribunal**

Por remisión al dictamen de la Procuración General, el voto único suscripto por Rosenkrantz, Lorenzetti y Maqueda resolvió que el decreto 1305/2012 no resulta aplicable a la PSA. La liquidación debe practicarse según la normativa específica para la PSA (decretos 836/08 y 1190/09).

### **Argumentos centrales**

En el dictamen al que remite la Corte, la Procuración General indicó que la Policía Aeronáutica

Nacional fue primero transferida del Ministerio de Defensa al del Interior bajo el nombre de PSA y luego ubicada, por ley 26.338, en la órbita del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Tras la sanción de la ley 26.102 de Seguridad Aeroportuaria, se dictó el decreto 836/08, que aprobó el Régimen Profesional del Personal Policial de la PSA, y el decreto 1190/09, que fijó el régimen aplicable al personal civil de la fuerza. Estos ordenamientos establecieron, asimismo, las retribuciones, compensaciones y subsidios correspondientes. La existencia de un régimen específico torna inaplicable el decreto 1305/12, que en sus considerandos remite a la ley 19.101 y establece el haber mensual del personal militar de las FFAA.

## **Caso N° 28**

### **“Canales” (2018)**

*Determinar los rubros que integran el haber mensual del personal policial es facultad expresamente otorgada por la ley al Poder Ejecutivo.*

30 Oct 2018

#### **Autos**

“Canales, José Luis y otros c/ Estado Nacional (Policía Federal Argentina) S/ suplementos fuerzas armadas y de seguridad”. FGR 21000434/2012/CS1. *Fallos*, 341:1400.

#### **Hechos y trámite previo**

Los actores, policías federales que prestan servicios en Neuquén, pretenden que, a los fines de liquidar el “suplemento zona sur” que les corresponde percibir según lo dispuesto por el art. 397 del decreto 1866/83, reglamentario de la ley para el personal de la Policía Federal Argentina (21.965), se incluya en la base de cálculo –además del sueldo básico– a los suplementos generales “por antigüedad de servicios” y “por tiempo mínimo cumplido”. Revocando la decisión de primera instancia, la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca declaró la inconstitucionalidad del art. 388 del decreto 1866/83 e hizo lugar a la pretensión. El tribunal sostuvo que el Poder Ejecutivo había excedido sus atribuciones reglamentarias al establecer que los suplementos generales no integran el haber mensual cuando el art. 75 de la ley citada definía al haber mensual como un concepto integrado en el ítem “sueldo básico” junto a otros rubros a ser determinados por vía de reglamentación. La demandada interpuso recurso extraordinario federal, que fue parcialmente concedido por encontrarse en debate la aplicación e inteligencia de normas federales.

#### **Principales antecedentes citados**

- “Lavandera de Rizzi” (1998): “Lavandera de Rizzi, Silvia c/ Instituto Provincial de la Vivienda”. *Fallos*, 321:441. 17 Mar 1998.

- “Fernández” (2003): “Fernández, Félix y otros c/ Gobierno de Mendoza”. *Fallos*, 326:2692. 12 Ago 2003.

- “Ortiz” (2004): “Ortiz, Francisco y otra c/ Banco Central s/ cobro de australes”. *Fallos*, 327:1899. 01 Jun 2004.
- “Indepro S.A.” (2008): “Indepro S.A. c/ Administración Federal de Ingresos Públicos y otro s/ Amparo”. *Fallos*, 331:2068. 16 Sep 2008.
- “Franco” (1999): “Franco, Rubén Oscar y otros c/ Estado Nacional (Ministerio de Defensa) s/ personal militar y civil de las FF.AA. y de seguridad”. *Fallos*, 322:1868. 19 Ago 1999.

### **Cuestión**

¿Es inconstitucional el art. 388 del decreto 1866/83? ¿De qué manera se conforma el haber mensual que constituye la base de cálculo del “suplemento zona sur”?

### **Respuesta del tribunal**

Por remisión al dictamen de la Procuración General, el tribunal –con las firmas de Rosenkrantz, Highton, Lorenzetti y Maqueda– resolvió que determinar los rubros que integran el haber mensual es una facultad expresamente otorgada al Poder Ejecutivo. El art. 388 del decreto 1866/83, en cuanto excluye a los suplementos generales del haber mensual, no es inconstitucional.

### **Argumentos centrales**

El dictamen de la Procuración General al que remitió la Corte destacó que la declaración de inconstitucionalidad –por su gravedad– procede solo si existe la convicción cierta de que afecta el derecho o la garantía constitucional invocados. Bajo este marco, lo dispuesto por el art. 75 de la ley 21.965 no basta para declarar la inconstitucionalidad del art. 388 del decreto 1866/83. El citado artículo establece que se denominará “haber mensual” al “sueldo básico y la suma de aquellos conceptos que perciba la generalidad del personal policial en servicio efectivo, cuya enumeración y alcances determine la Reglamentación”. Por lo tanto, determinar los rubros que lo integran pertenece al ámbito reglamentario. Si el legislador –agregó el dictamen– hubiera querido que los suplementos generales integraran el haber mensual, lo habría indicado así en el art. 75.

## [8] Derecho a la vivienda

### Caso N° 29

#### “Gómez, Lucía” (2018)

*La conducta omisiva del Estado provincial, que denegó reparaciones urgente en una vivienda propiedad del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda, vulneró los derechos constitucionales a la vivienda digna, la salud y la vida de la preadjudicataria y su grupo familiar.*

13 Nov 2018

#### **Autos**

“Gómez, Lucía Nélide y otro s/ amparo”. CSJ 1441/2016/RH1. *Fallos*, 341:1586.

#### **Hechos y trámite previo**

Una mujer de 62 años, empleada doméstica, y su nieto afectado por una discapacidad –con el patrocinio letrado de la Defensora de Pobres y Ausentes– promovieron acción de amparo contra la Provincia de Río Negro, el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) y la Municipalidad de Viedma, para que se ordenaran reparaciones urgentes en la unidad habitacional que padecía un “riesgo cierto, actual e inminente” de colapso de techos y electrificación de paredes. Las gravísimas deficiencias observadas –señalaron– comprometen el derecho a la vivienda digna y ponen en riesgo la salud y la vida de la mujer, preadjudicataria de la residencia, y de sus dos nietos a cargo.

Haciendo lugar a la acción, el juzgado de primera instancia ordenó al Poder Ejecutivo que, a través del IPPV o del organismo que correspondiese, reparara en el plazo de treinta días la unidad hasta lograr que estuviera en condiciones suficientes de habitabilidad para evitar el riesgo en la vida y la salud de los residentes.

Tras la apelación del Ejecutivo local, el STJ revocó la decisión por considerar improcedente la vía del amparo: otras actuaciones, iniciadas por los amparistas en 2011, tenían idéntico objeto.

Contra esa decisión los actores interpusieron recurso extraordinario federal que, denegado por ausencia de sentencia definitiva, dio origen a la presente queja.

#### **Cuestión**

¿Resulta procedente en este caso la vía del amparo para obtener la reparación de una vivienda ante el riesgo de colapso de techos y electrificación de paredes? ¿Las deficiencias del inmueble comprometen los derechos a la vida, la salud y a la vivienda digna de los actores?

#### **Respuesta del tribunal**

Por voto unánime de los ministros Rosenkrantz, Lorenzetti, Maqueda y Rosatti, la Corte declaró procedente la vía del amparo e hizo lugar a la demanda de reparaciones.

#### **Argumentos centrales**

La Corte consideró arbitraria a la sentencia recurrida. En primer lugar, la causa previa mencionada por el STJ tenía un objeto diverso (hacer cesar la oposición de vecinos a las reparaciones del inmueble en cuestión) y en ella no eran partes ni el Estado provincial ni el IPPV. Por otra parte, esa causa no es un cauce procesal apto para debatir los derechos en juego aquí (vivienda digna, salud y vida). A la vez, el voto de los cuatro ministros destacó el comportamiento contradictorio del IPPV en esa causa: no resistió la pretensión de la actora en sus presentaciones iniciales -en las que incluso

efectuó propuestas de planes de trabajo para realizar las reparaciones requeridas- pero luego, al cambiar las autoridades, cuestionó la procedencia de la acción.

En cuanto a la cuestión de fondo, la Corte indicó que existía riesgo cierto e inminente de lesión de los derechos de los actores que se encontraban inmersos en una honda problemática social; subrayó, asimismo, que la vivienda es de propiedad del Instituto y que la Sra. Gómez es únicamente preadjudicataria. Teniendo en cuenta el estado de inhabitabilidad de la residencia, la conducta omisiva del Estado vulneró los derechos constitucionales invocados.

### **Observaciones**

No hay referencia alguna en esta sentencia a la resolución recaída en autos “Q. C., S. Y. c/ Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ amparo” (*Fallos*, 335: 452, 24 Abr 2012), un fallo relevante en materia de derecho a la vivienda digna.

## [9] Derecho a la salud

### Caso N° 30

“Y., M. V.” (2018)

*Dado que la norma sobre tratamientos de reproducción asistida debe interpretarse según su finalidad de garantizar el derecho a la salud reproductiva, la cobertura alcanza a 3 tratamientos de alta complejidad por año.*

14 Ago 2018

#### **Autos**

“Y., M. V. y otro c/ IOSE s/ amparo de salud”. CCF 4612/2014 /CS1. *Fallos*, 341:929.

#### **Hechos y trámite previo**

Una mujer inicia acción de amparo contra la obra social IOSE, solicitando la cobertura integral y total del tratamiento de fertilización asistida. Propone una interpretación extensiva de la ley 26.862 y su decreto reglamentario 956/2013, de manera tal que la norma autorizaría tres tratamientos de alta complejidad por año. Tras una resolución favorable en primera instancia, la Cámara limitó la obligación de las obras sociales a solo tres procedimientos en total, y a 18 meses el plazo para la crioconservación de embriones. Esta decisión se funda en una interpretación literal del decreto reglamentario; contra ella la actora presenta un recurso extraordinario, concedido parcialmente.

#### **Cuestión**

¿Cuál es el alcance de la obligación de las obras sociales respecto a la cantidad de coberturas debidas por tratamientos complejos de fertilización asistida y el tiempo de criopreservación?

#### **Respuesta del tribunal**

La mayoría –integrada por Highton, Lorenzetti, Maqueda y Rosatti– determinaron que el decreto reglamentario autoriza tres tratamientos de alta complejidad por año y que el tiempo de crioconservación no debe obstaculizar el pleno resguardo del derecho a la salud reproductiva; en consecuencia, remiten la causa al tribunal de origen para el dictado de una nueva decisión según los criterios fijados. Rosenkrantz disiente, confirmando la sentencia apelada con costas, por remisión al dictamen de la Procuración.

#### **Argumentos centrales**

La mayoría destacó que el art. 1 de la ley 26.862 consagra como objeto el “acceso integral” a los procedimientos de reproducción médicamente asistida, incluyendo tanto las de baja como las de alta complejidad. Añadió –citando jurisprudencia de la propia CSJN– que el legislador ha dado amplio alcance a la cobertura de la salud reproductiva por su íntima vinculación con el derecho a la vida.

Luego analizó el art. 8 del decreto reglamentario 956/2013, que establece que “una persona podrá acceder a un máximo de cuatro (4) tratamientos anuales con técnicas de reproducción médicamente asistida de baja complejidad, y hasta tres (3) tratamientos [...], con intervalos mínimos de tres (3) meses entre cada uno de ellos”. A fin de que la interpretación de esta cláusula no contrarie los fines de la ley 26.862, debe entenderse que la cobertura incluye tres tratamientos de alta complejidad por año, tal como ocurre con los de baja complejidad. La omisión del término “anuales” en referencia a los tratamientos de alta complejidad solo se debe a un recurso idiomático para evitar una repetición

innecesaria. El voto de la mayoría consideró “inconveniente” la interpretación de la cámara. Agregó que –contra lo alegado por el IOSE– no puede utilizarse una resolución del Ministerio de Salud para interpretar el decreto reglamentario, ya que su jerarquía es inferior. Por otra parte, respecto a la cobertura de crioconservación, el voto mayoritario entendió que si bien es razonable la determinación judicial de un plazo ante la ausencia de legislación explícita, el lapso fijado no debe obstaculizar el “pleno resguardo del ejercicio del derecho a la salud reproductiva”; por ello consideró exiguo al establecido por la cámara.

La disidencia de Rosenkrantz remitió al dictamen de Procuración, que optó por una interpretación literal del decreto. La ausencia de la palabra “anuales” al indicar el número de tratamientos de alta complejidad significa, simplemente, que ese es el número total cubierto, como lo muestra el uso de la preposición “hasta”. La reglamentación –añadió el dictamen– apunta a garantizar el bienestar general y la “viabilidad social” del sistema sanitario. Asimismo, la Procuración sostuvo que la recurrente no demostró que el plazo de crioconservación resultara “irrazonable”, por lo que cabe confirmarlo. Por estas razones, el ministro Rosenkrantz votó por desestimar el recurso, con costas.

## Caso N° 31

### “T., I. H.” (2018)

*Las obras sociales no están obligadas a cubrir las actividades deportivas y/o recreativas de personas con discapacidad, ya que su derecho a la salud no es absoluto.*

14 Ago 2018

#### **Autos**

“T., I. H., en rep. U. E. G. T. T. c/ Obra Social del Poder Judicial de la Nación s/ leyes especiales (diabetes, cáncer, fertilidad)”. FSM 44691/2014/2/RH1. *Fallos*, 341:919.

#### **Hechos y trámite previo**

Representantes de un niño menor de edad con discapacidad iniciaron amparo de salud contra la obra social del Poder Judicial de la Nación. Reclamaron cobertura total de los costos generados por la participación del niño en el proyecto deportivo especial “Despertar”, desarrollado en un club social. La cámara hizo lugar a la demanda, revocando la sentencia del tribunal inferior. Para ello se fundó en la CN y en los tratados internacionales de derechos humanos, especialmente en los relativos a la protección del niño y de las personas con discapacidad. También se basó en las leyes 26.061, 22.431 y 24.901. En este marco, el tribunal de segunda instancia resaltó el derecho de las personas con discapacidad de gozar del máximo nivel posible de salud y de servicios para el tratamiento de su enfermedad y su rehabilitación, además del contexto de pobreza del hogar de la actora y de la mejora experimentada por el menor en su integración e inclusión social a raíz de su asistencia al programa en cuestión. La demanda interpuso recurso extraordinario, cuyo rechazo dio lugar a la queja.

#### **Cuestión**

¿Debe la obra social cubrir actividades deportivas o de recreación a personas con discapacidad?

#### **Respuesta del tribunal**

Lorenzetti, Rosatti, Rosenkrantz, y Maqueda consideraron que la obra social no estaba obligada a brindar cobertura de las actividades en discusión.

### **Argumentos centrales**

La Corte determinó que si bien la obra social del Poder Judicial de la Nación está expresamente excluida del régimen de obras sociales, por resolución 1126/2004 adhirió al esquema de prestaciones relativas a discapacidad y reguló el alcance de la atención. Por otra parte, entendió que las actividades lúdicas, deportivas o recreativas exceden el marco reglamentario del sistema de protección general de la salud y en particular del de las personas con discapacidad. Resaltó que lo peticionado no guarda relación con un servicio terapéutico concreto brindado en un centro de salud educativo, terapéutico o de rehabilitación psicofísica o motora. El beneficio obtenido en cuanto a la inclusión no justifica –a juicio de la Corte– la obligación de la obra social. A través de un argumento por el absurdo, el tribunal indicó que el criterio de la cámara podría exigir a las obras sociales abonar cualquier otra actividad de carácter social (como asistencia a espectáculos públicos o lugares de interés culturales).

Aun reconociendo que el derecho a la salud y la especial atención que merecen las personas con discapacidad tienen carácter fundamental, esto debe sujetarse a las reglamentaciones dictadas. Por ello, ya que ni las leyes 22.431 y 24.901 ni el decreto 1193/98 o la resolución 428/99 del Ministerio de Salud exigen la provisión de prestaciones deportivas y recreativas, la posición de la obra social no es arbitraria ni ilegítima. De la misma manera, la Corte valoró la propuesta de la obra social de realizar otra actividad e incluso la cobertura de la mitad de la cuota por parte de la demandada. A diferencia de la posición de la cámara, la Corte destacó que la situación de vulnerabilidad del hogar del niño afiliado solo era valorable para definir prestaciones domiciliarias.

### **Observaciones**

La Corte no incluyó en su análisis la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dotada de jerarquía constitucional por ley 27.044.



## **[10] Derechos de las personas con discapacidad**

### **Caso N°32**

**“V., M. C.” (2018)**

*Debe observarse especialmente el debido proceso en el caso de personas que sufren un padecimiento mental debido al estado de vulnerabilidad, fragilidad, impotencia y abandono en el que se encuentran frecuentemente.*

30 Oct 2018

#### **Autos**

“V., M. C. y otro s/ determinación de la capacidad.” CIV 34377/2014/1/RH1. *Fallos*, 341:1450.

#### **Hechos y trámite previo**

En el marco del proceso para determinar la capacidad de M. C. V., el juez de primera instancia designó en carácter de apoyo provisorio al Defensor Público Curador, por considerar que la causante no tenía bienes suficientes (art. 628, CPCCN). Esta decisión fue revocada por la alzada, quien entendió que el art. 626 inc. 1 del CPCCN da prioridad a la designación de un abogado de la matrícula y que solo corresponde la intervención del Defensor Público Curador cuando la denunciada carezca de bienes, o estos únicamente alcancen para su subsistencia (art. 628, CPCCN). En el caso, la causante poseía patrimonio, por lo que no procedía la designación del citado defensor. Contra esta decisión, la Defensora Pública de Menores e Incapaces de Cámara dedujo recurso extraordinario federal que, denegado, dio lugar a la interposición de un recurso directo.

#### **Principales antecedentes citados**

- “T., R. A.” (2005): “T., R.A. s/ internación -22127”. *Fallos*, 328:4832. 27 Dic 2005.
- “M., S. A.” (2008): “M., S.A. s/ insanía”. *Fallos*, 331:1859. 12 Ago 2008.
- “Terruli” (2015): “Terruli, Jorge Miguel c/ González, Manuel Enrique y otros s/ ejecución hipotecaria”. T. 334. XLVIII. RHE. 22 Dic 2015.

#### **Cuestión**

¿Incorre en arbitrariedad la sentencia recurrida?

#### **Respuesta del tribunal**

Los ministros Highton, Lorenzetti, Maqueda y Rosatti consideraron arbitraria la decisión recurrida porque no analiza elementos conducentes para la solución del litigio y realiza afirmaciones

dogmáticas que dan fundamento solo aparente a la resolución. Hicieron lugar al recurso, dejaron sin efecto la sentencia impugnada y mantuvieron la designación del defensor. Rosenkrantz emitió un voto concurrente.

### **Argumentos centrales**

La Corte sostuvo que el tribunal *a quo* omitió considerar la particular situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la causante, quien está internada desde el año 2008 y percibe un haber mínimo previsional. Si bien es titular de un inmueble y de una parte indivisa de otro (con un tercero en situación incierta), no se trata de bienes productivos. No puede afirmarse, añadió la Corte, que M.C.V. se encuentra en condiciones de satisfacer los honorarios de un abogado. Se ha menoscabado gravemente el debido proceso, comprometiendo la garantía constitucional de defensa en juicio (art. 18, CN). El tribunal recordó, como reiterada posición propia, que el respeto de la regla del debido proceso debe ser observado, con mayor razón, en el caso de quien padece un sufrimiento mental debido al estado de vulnerabilidad, fragilidad, impotencia y abandono en el que se encuentran frecuentemente estas personas.

Rosenkrantz, en su voto concurrente, reiteró el texto del voto central. Sin embargo, en lugar de basarse en el debido proceso, puso énfasis en “el principio constitucional a una tutela judicial efectiva” (cons. 6), un elemento también mencionado en el voto de los otros cuatro ministros.

## **Caso N° 33**

### **“Asociación Francesa” (2018)**

*La calidad de “niño” y “discapacitado” del titular de un crédito no le confiere una preferencia en la verificación de la quiebra.*

06 Nov 2018

### **Autos**

“Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia s/ quiebra s/ incidente de verificación de crédito por L.A.R. y otros”. CON 8283/2006/34/CS1. *Fallos*, 341:1511.

### **Hechos y trámite previo**

En el marco del incidente de verificación promovido en la quiebra de la Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia, el tribunal de primera instancia había declarado inconstitucional el régimen de privilegios concursales de la ley 24.522 y verificado a favor de M. B. L. un crédito con privilegio especial prioritario frente a cualquier otro. La Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial revocó la sentencia y asignó al crédito carácter quirografario. Si bien la acreencia se originaba en una indemnización por daños y perjuicios por mala praxis médica – señaló la Cámara–, no se confundía con aquellos daños, en tanto constituía un derecho nuevo e independiente del derecho violado. Contra esta decisión, los incidentistas, la Fiscal General ante la Cámara y la Defensora Pública de Menores e Incapaces, interpusieron recurso extraordinario federal. Allí sostuvieron que la indemnización reconocida es asistencial y su objeto consiste exclusivamente en cubrir los tratamientos médicos adecuados y los gastos que la salud de M.B.L. demanden. Agregaron que las disposiciones de la ley 24.522 deben ceder frente a las Convenciones

sobre Derechos del Niño y sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.

### Principales antecedentes citados

- “Barbarella” (1978): “Barbarella S.A.C.I.F.I. s/ concurso preventivo”. *Fallos*, 300:1087. 17 Oct 1978.
- “Marrone” (1981): “Marrone, Roberto c/ Egam S.C.A. s/ quiebra s/ ejecución hipotecaria”. *Fallos*, 303:1708. 12 Nov 1981.
- “Pinturas y Revestimientos aplicados SA”<sup>1</sup> (2014): “Pinturas y Revestimientos aplicados SA s/ quiebra”. *Fallos*, 337:315. 26 Mar 2014.

### Cuestión

¿La calificación del crédito de una niña con discapacidad como quirografario lesiona derechos de raigambre constitucional?

### Respuesta del tribunal

El voto mayoritario, suscripto por los ministros Rosenkrantz, Highton y Lorenzetti, consideró que calificar como quirografario al crédito en cuestión no lesiona derechos constitucionales.

Maqueda y Rosatti, en disidencias separadas, resolvieron que para no afectar derechos constitucionales, corresponde priorizar al crédito de M.B.L. frente al resto de las preferencias previstas por la ley 24.522.

### Argumentos centrales

Para la mayoría, el carácter de privilegiado a un crédito –lo que da derecho a ser pagado con preferencia a otro– solo puede surgir de la ley. Los privilegios constituyen una excepción al principio *par conditio creditorum*, derivado del principio de igualdad consagrado en el art. 16 de la CN, y deben ser interpretados en forma restrictiva.

Añadió el voto que ni las convenciones internacionales ni la ley 26.061 (o Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes) regulan específicamente la situación de niños (o personas con discapacidad) en tanto titulares de créditos en un proceso concursal. No se prevé una preferencia de cobro por la sola condición invocada. Los tres ministros firmantes señalaron que del mandato general de mayor protección constitucional que implica obligaciones a cargo del Estado, no puede derivarse directamente el reconocimiento de un derecho específico como el reclamado.

Destacaron que no les corresponde juzgar el acierto o conveniencia de los medios arbitrados y que la declaración de inconstitucionalidad es la *ultima ratio* del orden jurídico. La declaración de inconstitucionalidad basada en el amplio mandato de los convenios internacionales –explicaron– podría llevar a invalidar todo acto o norma que no conceda un trato preferente a cualquier sujeto comprendido en grupos vulnerables. Por último, señalaron que alterar el régimen de privilegios puede afectar la seguridad jurídica en general.

Maqueda, en su disidencia, afirmó que la preservación de la salud integra el derecho a la vida y las autoridades públicas están obligadas a garantizarlo mediante la realización de acciones positivas. Si bien los privilegios contemplados en la ley concursal –admitió– son una excepción al principio de paridad que solo debe resultar de disposiciones legales, la extrema vulnerabilidad presente en el caso no puede quedar desatendida por el tribunal, teniendo en cuenta las exigencias de los tratados internacionales. Concluyó que el crédito debe estar resguardado por un privilegio que lo coloque en

un plano superior al de los demás créditos, con el fin de garantizar el goce del derecho al más alto nivel posible de salud y de una vida plena.

Para Rosatti, la Convención de los Derechos del Niño y la Convención de las Personas con Discapacidad reconocen que los niños discapacitados se encuentran en una situación particular de vulnerabilidad que demanda una protección especial de parte del Estado, la familia, la sociedad y la comunidad. Agregó que en “Barbarella” (1978) y en “Marrone” (1981) la Corte había validado un enfoque de la igualdad entre acreencias que se acercaba a la igualdad material en lugar de la formal. Por ello, según Rosatti, es un deber ineludible de los jueces evaluar si las excepcionales particularidades del caso autorizan o justifican apartarse de la solución que impone el ordenamiento legal. Dada la delicada situación de salud en que se encuentra M.B.L., Rosatti entendió que la capacidad de sacrificio patrimonial que puede exigírsele deviene nula. Darle preferencia declarando la inconstitucionalidad del régimen de privilegios es un modo de implementar las obligaciones reforzadas que tienen el Estado, la familia, la comunidad y la sociedad toda en orden a garantizar y proteger los derechos de los niños y las personas con discapacidad.

### **Observaciones**

El dictamen de la Procuración General, emitido el 10 Abr 2017, remitió a lo aconsejado por la Procuradora General Gils Carbó en “Instituto Médico Antártida s/ Quiebra” - S.C. I. 344; L. XLVII, que trata una cuestión análoga. Este dictamen, fechado el 04 Nov 2014, sostuvo que el caso debía ser abordado a la luz de los derechos del niño y de las personas con discapacidad en tanto la indemnización verificada en el proceso falencial tiene por objeto satisfacer sus derechos específicos. Citó la sentencia de la Corte IDH, “Furlán y familiares vs. Argentina”, decidida el 31 de agosto de 2012. Para la Procuradora General, la protección especial prevista en los instrumentos internacionales de los derechos específicos de los niños discapacitados genera consecuencias concretas en el caso de la quiebra donde diversos acreedores concurren a procurar satisfacer sus créditos.

La tutela especial que cabe asignar al crédito del niño discapacitado –sostuvo el dictamen– debe conciliarse con la correspondiente al resto de los acreedores privilegiados, en particular a los de carácter especial (art. 241, ley 24.522), ya que su tutela excede lo individual y protege intereses colectivos subyacentes. Finalmente, aconsejó la Procuradora atender el crédito del niño discapacitado una vez satisfechos los créditos con privilegio especial y en las condiciones previstas para los créditos con privilegio general en el art. 246 de la ley 24.522. Asimismo, debe tener prioridad sobre los créditos con privilegio general verificados a favor del Estado en los términos del art. 246 inc. 4 de esa ley.

El dictamen completo puede consultarse en

[http://www.mpf.gob.ar/dictámenes/2014/AGilsCarbo/noviembre/Inst\\_Med\\_Ant\\_I\\_344\\_L\\_XLVII.pdf](http://www.mpf.gob.ar/dictámenes/2014/AGilsCarbo/noviembre/Inst_Med_Ant_I_344_L_XLVII.pdf).

## Caso N° 34

### “González Victorica” (2018)

*Es constitucional limitar las franquicias para importar automóviles destinados a personas con discapacidad según la capacidad económica del solicitante, pero no de su grupo familiar.*

21 Nov 2018

#### **Autos**

“González Victorica, Matías y otros c/ EN - AFIP DGI - dto. 1313/93 s/ proceso de conocimiento”. CAF 20217/2005/CS1. *Fallos*, 341:1625.

#### **Hechos y trámite previo**

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia de primera instancia que había declarado inconstitucionales el art. 3 de la ley 19.279 y del art. 8 del decreto reglamentario 1.313/93, que restringen el acceso a franquicias fiscales para la importación de automóviles para personas con discapacidad en función de la capacidad económica del grupo familiar de quien las solicita.

La demandada interpuso recurso extraordinario, concedido en tanto objetó la declaración de inconstitucionalidad de la ley 19.279 y del decreto 1.313/93.

#### **Principales antecedentes citados**

- “Reyes Aguilera” (2007): “Recurso de hecho deducido por Luisa Aguilera Mariaca y Antonio Reyes Barja en representación de D. R. A. en la causa R. A., D. c/ Estado Nacional”. *Fallos*, 330:3853. 04 Sep 2007.
- “Q. C., S. Y.” (2012): “Q. C., S. Y. c/ Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y otro s/amparo”. *Fallos*, 335: 452. 24 Abr 2012.
- “Barrose” (1995): “Barrose, Luis Alejandro c/ Ministerio del Interior - art. 3° ley 24.043”. *Fallos*, 318:1707. 12 Sep 1995.
- “Salmón” (1937): “Salmón, María F. de c/ Impuestos Internos. Magnaldi, José c/ Impuestos Internos”. *Fallos*, 178:224. 28 Jul 1937.
- “A. M. B.” (2010): “A. M. B. y otro c/ EN - M° Planificación Dec. 118/06 (ST) s/ amparo Ley 16986”. *Fallos*, 333:777. 01 Oct 2010.
- Caso “Furlán y familiares v. Argentina”, sentencia de la Corte IDH, 31 Ago 2012.

#### **Cuestión**

¿Son constitucionales las normas que restringen el acceso a franquicias fiscales para la importación de automóviles destinados a personas con discapacidad en función de la capacidad económica del grupo familiar del solicitante?

#### **Respuesta del tribunal**

Por remisión parcial al dictamen de la Procuración, Highton y Rosatti consideraron que solo el art. 8 del decreto reglamentario 1.313/93 tenía carácter inconstitucional. Ambos ministros excluyeron de su remisión a los párrafos sexto a noveno inclusive del apartado VI, donde se detallan deberes del Estado en relación a las personas con discapacidad.

Lorenzetti y Maqueda suscribieron un voto concurrente añadiendo argumentos propios.

#### **Argumentos centrales**

En el dictamen al que remitió el voto de Highton y Rosatti, la Procuración sostuvo que en el diseño

de la ley 19.279 la capacidad económica del solicitante constituye un factor objetivo para determinar la procedencia del beneficio impositivo. Se busca focalizar el apoyo exclusivamente en un grupo intermedio de personas con discapacidad: aquellas que cuentan con suficientes recursos para aportar una parte sustancial del precio del rodado y para su mantenimiento, pero que no podrían acceder al bien sin la franquicia fiscal. Dicha política, para el dictamen, puede considerarse incluida entre las medidas de acción positiva previstas en el art. 75 inc. 23 de la CN. Agregó que el art. 20 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dispone que los Estados deben “adoptar medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible”; tales medidas de facilitación incluyen poner a disposición esas condiciones de movilidad a un costo asequible.

La distinción según la capacidad económica del solicitante encuentra –según estableció el dictamen– una justificación objetiva, fundada y razonable: no se busca excluir a solicitantes con mayor capacidad económica del acceso a la movilidad de calidad, sino dirigir la ayuda estatal hacia quienes requieren de ella para acceder a un automóvil.

Por otra parte, el art. 3 de la misma ley debe leerse como una autorización para ponderar la posible ayuda familiar solo a fines de incluir al solicitante en el beneficio impositivo. El dictamen rechazó, en cambio, que esa posible ayuda sirva como razón para denegar el beneficio: la familia no tiene ninguna obligación legal de contribuir a la compra del vehículo. Concluyó que no se trata de un indicador objetivo y fehaciente de la efectiva capacidad económica de la persona interesada; podría llevar a soluciones injustas que dejen fuera de la franquicia a personas cuyas familias no aporten a la compra de la movilidad.

Por todo ello, el art. 8 inc. 3 del decreto 1.313/93, en tanto obliga a la AFIP a denegar el beneficio según el patrimonio del grupo familiar, excede las competencias reglamentarias del Poder Ejecutivo y desnaturaliza los fines de la norma. Resulta inconstitucional por ser un medio inadecuado para asegurar que la franquicia beneficie a quienes verdaderamente requieren de ella; especialmente, va contra la finalidad de garantizar la autonomía e independencia de las personas con discapacidad.

En su voto, Maqueda y Lorenzetti coincidieron sustancialmente con los argumentos de la Procuración, aunque citaron más frecuentemente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por otra parte, agregaron –sin que hubiera cuestionamiento puntual por la actora– un análisis sobre la razonabilidad de los criterios del decreto reglamentario para analizar la situación económica del solicitante. También introdujeron (cons. 4) la noción de “vulnerabilidad” (ausente en el dictamen) y retomaron –sin nombrar a John Rawls, como sí lo hizo después la mayoría en “Blanco” (2018)– la idea del “amplio consenso” que concita el principio de justicia que manda “desarrollar las libertades y los derechos individuales hasta el nivel más alto compatible con su igual distribución entre todos los sujetos que conviven en una sociedad dada, así como introducir desigualdades excepcionales con la finalidad de maximizar la porción que corresponde al grupo de los menos favorecidos” (cons. 3).

## **Observaciones**

Por remisión a esta sentencia, la Corte resolvió el mismo día “Antonucci Posso, María Soledad c/ E. N. – AFIP s/ proceso de conocimiento”. CAF 3661/2014/CA1-CS1.

## Caso N° 35

### “Olivo” (2018)

*Incluso en causas que no corresponden a la competencia de la Corte, el tribunal puede dictar una medida cautelar innovativa si aparece con suficiente claridad que su denegatoria podría generar – en las excepcionales y particulares circunstancias de una persona con discapacidad– daños que deben evitarse.*

11 Dic 2018

### Autos

“Olivo, Pablo Ezequiel y otra c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”. CSJ 467/2016. *Fallos*, 341:1854.

### Hechos y trámite previo

Como resultado de una mala praxis médica, una niña padece una severa discapacidad. Sus padres, por sí y en representación de su hija, interponen ante la Corte –en su instancia originaria– una demanda en contra de los Estados nacional y bonaerense, abarcando además al hospital y al profesional involucrados, a fin de obtener indemnización. En ese marco, solicitan como medida cautelar la provisión de una silla de ruedas motorizada.

### Principales antecedentes citados

- “Aadi Capif” (1997): “Aadi Capif Asociación Civil Recaudadora c/ Establecimiento Kronos y otro”. *Fallos*, 320:1663. 12 Ago 1997.
- “Salta” (2003): “Salta, Provincia de c/ Estado Nacional s/ ejecutivo”. *Fallos*, 326:3210. 01 Sep 2003.
- “Podestá” (2003): “Podestá, Leila Grisel c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”. P. 1690. XXXIX. 18 Dic 2003.
- “Pardo” (2011): “Pardo, Héctor Paulino y otro c/ Di Césare, Luis Alberto y otro s/ art. 250 del C.P.C.”. *Fallos*, 334:1691. 06 Dic 2011.
- “José Minetti y Cía.” (2018): “José Minetti y Cía. Ltda. SACEI c/ Tucumán, Provincia de s/ incidente de medida cautelar”. *Fallos*, 341:169. 27 Feb 2018.

### Cuestión

¿Puede la Corte dictar una medida cautelar innovativa en un caso que no corresponde a su competencia?

### Respuesta del tribunal

Highton, Lorenzetti y Maqueda consideran que en las excepcionalísimas circunstancias del caso corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada. Dentro de su disidencia parcial, Rosatti coincide con la mayoría en este punto. En disidencia, Rosenkrantz rechaza el pedido de la cautelar.

### Argumentos centrales

El voto mayoritario hizo eje en que –pese al marco estrecho en que podía estudiarse la cuestión– existía peligro en la demora, lo que aparecía en forma objetiva debido a la situación de la niña y su necesidad de cuidados; mantener la situación tal como estaba implicaba la posibilidad de daños que correspondía evitar. Rosatti concurrió con los mismos argumentos.

En su disidencia, Rosenkrantz subrayó que la Corte carecía de jurisdicción para pronunciarse sobre la cautelar, citando el art. 196 del CPCCN. Añadió que esa norma se propone evitar que la parte

demandante elija ante qué tribunal solicitar tales medidas, lo que afectaría el principio de imparcialidad. Por último, agregó que en el expediente no se había alegado ni probado que las afecciones de la niña pudieran agravarse “durante el breve tiempo” que transcurriría hasta la intervención del tribunal competente.

### **Observaciones**

El fallo también debate la cuestión de competencia, que escapa al eje de esta publicación. El voto mayoritario, junto a la disidencia parcial de Rosenkrantz, rechazaron que la causa pudiera tramitarse en la instancia originaria. Rosatti disintió en este aspecto con sus cuatro colegas: consideró prematuro pronunciarse sobre la cuestión de la competencia en ese punto del proceso.



## Abreviaturas

ANSeS – Administración Nacional de la Seguridad Social  
ART – Aseguradora de Riesgos de Trabajo  
Art., arts. – artículo, artículos.  
AUH – Asignación Universal por Hijo  
CC – Código Civil (vigente hasta 31 Jul 2015)  
CCC – Código Civil y Comercial (vigente desde el 01 Ago 2015)  
CN – Constitución Nacional  
Comité. DESC – Comité. de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas  
Corte IDH – Corte Interamericana de Derechos Humanos  
CPCCN – Código Procesal Civil y Comercial de la Nación  
CSJN – Corte Suprema de Justicia de la Nación  
EMGE – Estado Mayor General del Ejército  
FFAA – Fuerzas Armadas  
inc., incs. – inciso, incisos  
IOSE – Instituto Obra Social del Ejército  
ISBIC – Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción  
LCT – Ley de Contrato de Trabajo (ley 20.744, de 1974).  
LRT – Ley de Riesgos de Trabajo (ley 24.557, de 1995)  
OIT – Organización Internacional del Trabajo  
PDESC – Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  
PSA – Policía de Seguridad Aeroportuaria  
RIPE – Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables  
SAC – Sueldo Anual Complementario  
SRT – Superintendencia de Riesgos del Trabajo  
STJ – Superior Tribunal de Justicia  
TSJ – Tribunal Superior de Justicia  
UNR – Universidad Nacional de Rosario

## Listado de casos

“Albornoz”. N° 09

“Asociación Francesa”. N° 33

“Barrera”. N° 27

“Benoist”. N° 02

“Blanco”. N° 04

“Caliva”. N° 18

“Canales”. N° 28

“Correcher Gil”. N° 15

“DEPC”. N° 21

“Díaz”. N° 03

“Díaz García”. N° 13

“Farrell”. N° 17

“Gasparutti”. N° 22

“Gómez, Félix”. N° 23

“Gómez, Lucía”. N° 29

“González Victorica”. N° 34

“Governatore”. N° 01

“Jaques”. N° 25

“Molina”. N° 10

“Olivo”. N° 35

“Ortiz”. N° 16

“Páez Alfonzo”. N° 11

“Palacín”. N° 12

“Rapisardi”. N° 06

“Rica”. N° 14

“Segura”. N° 24

“T., I. H.”. N° 31

“Tejera”. N° 05

“UNR”. N° 20

“V., M. C.”. N° 32

“Varela”. N° 19

“Villanueva”. N° 08

“Y., M. V.”. N° 30

“Yurrita”. N° 26

“Zaragoza”. N° 07.

## Sobre GIDES

Constituido en 2012, el Grupo de Investigación en Derechos Sociales (GIDES) incluye hoy diecisiete personas, desde estudiantes de grado hasta docentes con título de doctor, además de profesionales independientes e integrantes de la magistratura y el ministerio público; cuenta también con ayudantes de investigación. La dirección está a cargo de Horacio Javier Etchichury, con la co-dirección de Magdalena Álvarez.

El grupo se halla radicado en el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), donde lleva adelante –entre otras tareas– proyectos de investigación con financiamiento de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNC. La línea central de trabajo consiste en revisar políticas públicas a la luz de los derechos sociales dotados de jerarquía constitucional.

Como regla general y por aplicación de la ley 26.899, GIDES publica con licencias de acceso abierto.

Más información sobre GIDES y acceso a sus trabajos en:

**[GidesCordoba.blogspot.com](http://GidesCordoba.blogspot.com)**

## Sobre las autoras y los autores

**ÁLVAREZ, MAGDALENA INÉS.** Doctora en Derecho y Ciencias Sociales (Universidad Nacional de Córdoba [UNC], 2019). Magister en Derecho y Argumentación (UNC, 2010). Abogada (UNC, 1985). Premio Universidad, Mención de Honor (1985). Premio Mauricio Yadarola (1985). Premio Henoch Aguiar (1985). Premio “Abanderados de Derecho” de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba (1985). Profesora adjunta por concurso, Derecho Procesal Constitucional y Profesora adjunta, Derecho Constitucional, Facultad de Derecho [FD], UNC. [magdalenaines@gmail.com](mailto:magdalenaines@gmail.com)

**CENA, MARÍA JULIETA.** Magíster en Derecho y Argumentación (UNC, 2018). Abogada (UNC, 2008). Diploma al Mérito, FD, UNC. Doctoranda en Administración y Política Pública, Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública, UNC. Doctoranda en Derecho y Ciencias Sociales, FD, UNC. Becaria doctoral, CONICET. Profesora ayudante “A”, Derecho Constitucional, FD, UNC. Adscripta en Derecho Constitucional, licenciatura en Ciencias Políticas, Facultad de Ciencias Sociales, UNC.

**COCCA, NICOLÁS.** Abogado (UNC, 2008). Adscripto en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional, FD, UNC. Maestrando en Antropología, tesis en curso, Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC. Abogado en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Correo electrónico: [coccanicolas@gmail.com](mailto:coccanicolas@gmail.com)

**ETCHICHURY, HORACIO JAVIER.** Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (UNC, 2010). Master of Laws [LL. M.] (Yale Law School, 2004). Premio Universidad, Mención de Honor (1997). Abogado (UNC, 2000). Licenciado en Comunicación Social (UNC, 1997). Investigador adjunto, CONICET. Profesor adjunto, Introducción al Derecho, FD, UNC. Profesor ayudante “A”, Derecho Constitucional, FD, UNC. [etchichury74@gmail.com](mailto:etchichury74@gmail.com)

**FERNIOT, CECILIA ANDREA.** Abogada (UNC, 2006). Magister en Derecho y Argumentación (UNC, 2015). Profesora ayudante “A”, Derecho Constitucional, FD, UNC. Auxiliar por concurso, Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. Correo electrónico: [cecilia.ferniot@yahoo.com.ar](mailto:cecilia.ferniot@yahoo.com.ar)

# Índice

**Presentación, 4**

**2018: Qué hizo la Corte en derechos sociales, 5**

**[1] Derecho a jubilaciones y pensiones móviles, 9**

**[2] Derecho a la seguridad social, 15**

**[3] Derecho a la seguridad social: Aseguradoras de Riesgo del Trabajo, 23**

**[4] Derecho al trabajo y a retribución justa, 29**

**[5] Despido discriminatorio, 33**

**[6] Garantías gremiales, 37**

**[7] Derechos del personal de Fuerzas Armadas y de Seguridad, 41**

**[8] Derecho a la vivienda, 51**

**[9] Derecho a la salud, 53**

**[10] Derechos de las personas con discapacidad, 56**

**Abreviaturas, 64**

**Listado de casos, 65**

**Sobre GIDES, 66**

**Sobre las autoras y los autores, 67**

# desco18

---

**Aquí se relevan las sentencias sobre derechos sociales emitidas por la Corte Suprema argentina durante 2018. De cada una se brindan los datos básicos y una síntesis lo más concisa posible de la cuestión planteada, la respuesta del tribunal y los argumentos centrales.**

**Con el objetivo de contribuir al debate sobre los derechos sociales en Argentina, se pone esta información de referencia al alcance del público en general, y especialmente, de quienes estudian la materia, litigan estos derechos en tribunales o deben resolver casos concretos.**



**GIDES**

GRUPO DE INVESTIGACIÓN  
EN DERECHOS SOCIALES

 @GidesCordoba

 derechossocialescordoba

GidesCordoba.blogspot.com

**GIDES (Grupo de Investigación en Derechos Sociales) incluye estudiantes, profesionales y docentes. Constituido en 2012, está radicado en el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Su línea central de trabajo es la revisión de políticas públicas a la luz de los derechos sociales.**